



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

**Departamento de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica,
Moral y Política**

Historia del Derecho y de las Instituciones

Curso 2014/2015

Principio de laicidad y Sistema matrimonial de la Segunda República Española y Primer Franquismo

Nombre del estudiante: Javier Álvarez Parra

Tutor: Javier Infante Miguel-Motta

Mes: Junio

Año: 2015

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

**Departamento de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica,
Moral y Política**

Historia del Derecho y de las Instituciones

Principio de laicidad y Sistema matrimonial de la Segunda República Española y Primer Franquismo

The principle of secularism and the matrimonial regime of the Second Spanish Republic and the early years of Franco's dictatorship

**Nombre del estudiante: Javier Álvarez Parra
e-mail del estudiante: japarra@usal.es**

Tutor: Javier Infante Miguel-Motta

RESUMEN

El presente estudio tiene por objeto el análisis histórico-jurídico de la incorporación del principio de laicidad en la Constitución de la Segunda República Española de 1931, así como de las importantes consecuencias que éste tuvo en el ordenamiento jurídico privado, en concreto, en uno de los asuntos que generó los tan interesantes y conflictivos debates a nivel jurídico, político y social como fue el sistema matrimonial, exclusivamente civil, adoptado por las Cortes republicanas con la Ley de 28 de junio de 1932.

La sublevación militar iniciada el 18 de julio de 1936, puso fin al proceso secularizador comenzado por la República. Se describirá el sistema matrimonial canónico impuesto por el régimen golpista del general Franco, que supuso, definitivamente, la demolición de toda la obra republicana, sobretodo de aquella que más había contribuido al progreso moral y cultural de la sociedad española, pasando así de la República laica y democrática a la España Nacional Católica.

PALABRAS CLAVE: República, laicidad, matrimonio, familia, franquismo.

ABSTRACT

This paper aims to proceed with a historical and juridical analysis on the introduction of the principle of secularism within the Second Spanish Republic's Constitution (1931), as well as its consequences for the private law system, particularly, for one of the most controversial issues at the juridical, political and societal level: a purely civil matrimonial regime adopted by the Republican Courts under the Law issued on June 28, 1932.

However, the military insurrection initiated on July 18, 1936 brought to an end the secular process started during the Second Republic. The current analysis also tackles the canonical matrimonial system imposed by Franco's regime, which meant the very end of the republican efforts, especially those aimed to improve the moral and cultural standards of the Spanish society, and thus replacing a secular and democratic Republic for the National Catholic Spain.

KEYWORDS: Republic, secularism, marriage, family, Franco's dictatorship.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	5
II. LOS ORÍGENES Y LA CONFIGURACIÓN JURÍDICA DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD: DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA A LA LEY DE SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO DE 1905	7
III. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931 Y SU CONFIGURACIÓN LAICA: LOS ARTÍCULOS 3 Y 43.....	12
IV. LAS SINGULARIDADES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931 Y LAS CRÍTICAS DE LA DOCTRINA JURÍDICA.....	25
V. EL INFLUJO, EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL, DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931: EL NUEVO SISTEMA MATRIMONIAL	29
VI. EL CONTENIDO DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL DE 28 DE JUNIO DE 1932	33
VII. LOS COMENTARIOS DE LA DOCTRINA JURÍDICA AL RESPECTO DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL DE 28 DE JUNIO DE 1932	35
VIII. LA SUBLEVACIÓN MILITAR DE 18 DE JULIO DE 1936 Y LA GUERRA CIVIL: LA LEGISLACIÓN MATRIMONIAL DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO	38
IX. LA ESPAÑA NACIONAL CATÓLICA: EL SISTEMA MATRIMONIAL DEL PRIMER FRANQUISMO 1939-1959	44
X. CONCLUSIONES.....	47
BIBLIOGRAFÍA.....	51
ANEXOS.....	54

I. INTRODUCCIÓN

La victoria de las formaciones republicanas y socialistas en las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931, que ocuparon más del noventa por ciento de los escaños, abrió un periodo constituyente en el que unas Cortes, elegidas libremente por sufragio universal y formadas por personas que representaban los intereses políticos de todos los españoles, pretendieron elaborar una constitución que, por primera vez en la historia de España, podría calificarse de plenamente democrática y que encarnaba los más excelsos valores y principios del espíritu republicano, democrático y laico.

El siguiente estudio tendrá como objeto el análisis histórico-jurídico de las transformaciones en el ordenamiento jurídico privado en el periodo de la II República española, en concreto en uno de los asuntos que conectado con el principio de laicidad generó interesantes y conflictivos debates a nivel jurídico, político y social como fue el régimen matrimonial, exclusivamente civil, adoptado por las Cortes republicanas con la Ley de 28 de junio de 1932. El principio de laicidad y de separación Iglesia-Estado incorporado en la Constitución de 9 de diciembre de 1931, el análisis de los artículos 3 y 43 de la misma, el nuevo concepto de familia, junto con las consecuencias que éstos tuvieron en el resto del ordenamiento jurídico civil español, serán objeto de análisis.

Los objetivos de los republicanos eran evidentes, y consistían en instaurar en España una República, constitucional y democrática, que acabara por destruir cualquier resquicio del pasado, que eliminara el antiguo sistema oligárquico y caciquil del que el Rey, el Ejército, los grandes propietarios y la Iglesia católica se habían beneficiado durante siglos. Dichas pretensiones contarían con las resistencias de los que acumulaban el capital y la tierra, de los militares, pero también de los que se oponían a la democracia, al pluralismo y, en conclusión, a cualquier progreso cultural y social como era la Iglesia Católica, Organización que representaba el pensamiento más reaccionario y que asimilaba la libertad individual, la democracia y la pérdida de privilegios como un atentado contra Dios, el cristianismo y la Patria.

Los republicanos comprendieron que revolucionar el sistema de valores de la sociedad española solo podía hacerse de un modo, y era transformando radicalmente el

ordenamiento jurídico, expulsando constitucionalmente a la Iglesia Católica de las instituciones, así como de la vida pública y privada de los españoles.

Y así se hizo con el artículo 3¹ de la Constitución que consagraba el principio de separación Iglesia-Estado, que en conexión con el artículo 43² referido a la familia, la transformaba dejando ésta de estar dominada por la moral católica imperante y pasaba a ser una familia laica que estaría “bajo la salvaguardia especial del Estado” en la que “El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges”.

Es por ello por lo que con el fin de comprender el porqué de la configuración laica de la Constitución republicana, con la incorporación de los dos artículos anteriormente citados, resulta imprescindible comenzar el estudio con un análisis del principio de laicidad y de separación Iglesia-Estado desde sus orígenes filosóficos e históricos, tomando en consideración la Revolución francesa, para después concretar su materialización a nivel político y jurídico en legislaciones como la de la II República española, fuertemente laica.

En segundo lugar, se analizará el proceso de elaboración de la Constitución de la II República de 1931, centrándose el estudio en el principio de laicidad del Estado republicano, incorporado en el artículo 3 y en el nuevo concepto de familia, secularizado y laico, que crea el artículo 43 consecuencia directa del anterior.

Posteriormente, se estudiará una de las manifestaciones que mayor trascendencia tuvo en el Derecho privado, fruto del influjo secularizador de la Constitución republicana, como fue la promulgación de la Ley de 28 de junio de 1932 de Matrimonio Civil.

La sublevación militar iniciada el 18 de julio de 1936, dividió el territorio nacional en dos entes de poder, poniéndose fin en la zona sublevada al proceso secularizador comenzado por la República. El nuevo ente de gobierno ilegítimo comenzará un proceso de destrucción de toda la obra legislativa republicana, sobre todo de aquella que más había contribuido al progreso cultural, moral y social de España. Habrán de

¹ Artículo 3 de la Constitución de la II República Española de 1931: “El Estado español no tiene religión oficial”.

² Anexos: I. Preceptos que consagran la configuración laica de la Constitución de la II República Española de 1931.

estudiarse, por tanto, las disposiciones legislativas que nacen de esta nueva administración, así como las emanadas a lo largo de los años cuarenta y cincuenta del ya consolidado régimen golpista y autoritario del general Franco. Estos acontecimientos supusieron definitivamente la demolición de toda la obra republicana, pasando así de la República laica y democrática a la España Nacional Católica.

II. LOS ORÍGENES Y LA CONFIGURACIÓN JURÍDICA DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD: DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA A LA LEY DE SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO DE 1905

Sería una tarea de especial complejidad comprender el porqué de la aprobación de los artículos 3 y 43 de la Constitución republicana, así como de la Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932, si no nos remontásemos a una serie de principios y fundamentos filosóficos que, desde finales del siglo XVII, vendrían a construir el armazón ideológico de la Ilustración, que supondría el fin del Antiguo Régimen en todas sus perspectivas sociales, morales, políticas, jurídicas y económicas.

Los ilustrados, herederos del antropocentrismo, teniendo fe ciega en el progreso de la humanidad, comprendiendo que solo a través de la educación se puede alcanzar la perfección y la felicidad, sitúan al hombre en el centro del universo. Esta nueva concepción colisiona de pleno con la concepción teocentrista que defendía la Iglesia Católica y los enemigos del progreso, defensores del Antiguo Régimen.

La verdad revelada por un ente divino pierde su sentido inicial, puesto que es el hombre, el que a través de la razón y de la experimentación, descubre la realidad y se configura a sí mismo. “Con la instrucción, todo mejora y florece; sin ella, todo decae, se arruina en el Estado”³.

Este nuevo individuo autónomo, que formula su propia conciencia, su visión de sí mismo y del universo, deberá necesariamente de ser asumido por el poder político. Es así como nace para él un campo vedado, que se identificaría con la conciencia, al que ni el Estado, como poder temporal, ni la Iglesia, como poder espiritual, tendrán competencia para invadir. Se traza una línea divisoria entre el poder político temporal y el poder espiritual trascendental, así como entre el ámbito de lo público, que trasciende

³ JOVELLANOS, G. M. de., *Memoria sobre educación pública*, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1858, p. 232.

a todos, y el ámbito de lo privado, que concierne tan solo al propio individuo, que construye su identidad libremente.

Los principios filosóficos y políticos ilustrados, que crean el nuevo concepto de hombre, que se configura de manera autónoma a través de la educación, las guerras de religión que asolaron Francia a lo largo del siglo XVI, junto con los intentos de pacificar la sociedad, van formulando la idea de la secularización del poder político.

Es así como, progresivamente, se construye ideológicamente un nuevo concepto de Estado, caracterizado por ser un poder político secularizado, que por ende propugna la separación Iglesia-Estado y la neutralidad del poder político en materia religiosa. De este modo, se garantiza la libertad de conciencia a través de la cual el hombre tiene la posibilidad de constituir su propia identidad; un ámbito al que el Estado tiene acceso restringido. Así lo ponía de manifiesto Rousseau, quien al final de una de sus obras más conocidas, el Contrato social, defiende que “Los súbditos no tienen, pues, que dar cuenta al soberano de sus opiniones sino en tanto esas opiniones importan a la comunidad (...). Los dogmas de esta religión no le interesan ni al Estado ni a sus miembros (...). Cada cual puede tener, por lo demás, las opiniones que le plazca, sin que necesite enterarse de ellas el Soberano; porque como no tienen ninguna competencia en el otro mundo, cualquiera que sea la suerte de los súbditos en una vida postrera, no es asunto que a él le competa, con tal que sean buenos ciudadanos en esta”.⁴

También señalaba, refiriéndose a la aconfesionalidad del Estado, que “Ahora que no existe ni puede existir religión nacional exclusiva, se deben tolerar a las otras, mientras sus dogmas no tengan nada contrario a los deberes del ciudadano. Pero cualquiera que se atreva a decir “fuera de la Iglesia no hay salvación” debe ser echado del Estado, a menos que el Estado no sea Iglesia y que el príncipe no sea el pontífice”⁵

Este conjunto de construcciones filosóficas e ideológicas podían parecer mera abstracción. Sin embargo, la Revolución francesa condujo a materializarlas, construyendo un nuevo poder político, transformándose el Estado y el Derecho, tanto en su vertiente pública como privada, produciéndose un cataclismo que destruiría el Antiguo Régimen.

⁴ ROUSSEAU, J. J., “La religión civil”, *El contrato social*, Circo, Italia, 2011, p. 146.

⁵ ROUSSEAU, J.J., “La religión civil”, *El contrato social*, Circo, Italia, 2011, p. 148.

Estudiar el Principio de laicidad, como concepto jurídico constitucional, necesariamente nos conduce en primer lugar, a la Revolución francesa y en segundo lugar, a la Ley de Separación Iglesia-Estado de 1905, a través de que la verdaderamente se produce la consagración jurídica del principio de laicidad y de separación Iglesia-Estado.

Autores como Víctor J. Vázquez Alonso aportan una serie de factores⁶ determinantes para la configuración jurídica del principio de laicidad que serán aquí analizados.

En primer lugar, la diferenciación que se produjo en el contexto histórico analizado de los conceptos Estado y sociedad civil, implicará necesariamente distinguir entre lo público y lo privado. Entendiéndose que la conciencia es algo que forma parte de lo íntimo, se construye una esfera privada en la que el Estado no puede penetrar. Esto no es más que la consecuencia lógica derivada de la asunción del Estado como representante de lo público, y la Iglesia como representante de lo espiritual; esferas que bajo ninguna circunstancia deben confundirse. Teniendo en cuenta este primer factor, podría determinarse que la laicidad necesariamente implicará la separación Iglesia-Estado, junto con la garantía de la libertad religiosa.

En segundo lugar, la construcción del concepto jurídico de ciudadano, como sujeto autónomo, perteneciente a una comunidad política, determina la prohibición de cualquier clase de discriminación por motivos económicos, raciales o religiosos.

Por último, la proclamación de la soberanía popular fue determinante puesto que, el poder político ya no está legitimado por un ente divino sino que es la nación constituida por hombres libres e iguales la que, conformando la sociedad civil, legitima el poder del Estado.

Sería conveniente mencionar algunas disposiciones tendentes a cumplir con la pureza del pensamiento radical revolucionario francés, en lo que respecta a la cuestión religiosa, durante el periodo de la Revolución: en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 se reconoce la libertad de conciencia

⁶ VÁZQUEZ ALONSO, V, J., “Los perfiles jurídicos del modelo de laicidad francés”, *Laicidad y Constitución*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, p. 169.

en su artículo 10⁷, la Constitución de 3 de septiembre de 1791 dispone la libertad religiosa y de culto, y se suprimen las órdenes y congregaciones religiosas por representar una amenaza para los intereses de la República. El artículo 354 de la Constitución de la República francesa de 22 de agosto de 1795 declaraba la libertad de cultos y la prohibición de sostener económicamente alguno de ellos.

Hay algunos decretos, como el de 18 de septiembre de 1794, donde se indica que la República no mantendrá ningún culto, ni reconoce a sus ministros y tampoco suministrará locales para su ejercicio. En el artículo 16 del Decreto de 29 de septiembre de 1795, se prohíbe la celebración del culto fuera del edificio designado para su ejercicio.

En lo que se refiere al ámbito del Derecho privado, es destacable cómo la Constitución de 1791 seculariza el matrimonio, los registros civiles sobre nacimientos, matrimonios y fallecimientos que, a partir de ese momento, serán labores que ejercerán funcionarios o autoridades municipales. Durante este periodo se promulgó la Ley del Divorcio de 20 de septiembre de 1792.

La oposición de la Iglesia Católica, que continuaba siendo un poder fáctico, condujo a la firma del Concordato de 1801 entre la Francia napoleónica y la Santa Sede puesto que “la ausencia de conflictos con la Iglesia Católica aseguraba la estabilidad del Gobierno imperial”⁸. Fruto de este concordato, se produce un freno a la laicización del poder político ya que la Iglesia francesa más que independizarse del Estado, se subordinó a él. A partir de ese momento, quedaba declarada la religión católica como la mayoritaria de los franceses, se reconocía el pluralismo religioso, y el Estado asumía la competencia para controlar a las Iglesias. Además, se impone la obligación de sufragar el culto y a los sacerdotes. Todas estas disposiciones son un freno para la configuración jurídica, en su totalidad, del principio de laicidad, como categoría jurídico-constitucional, que se consolidará verdaderamente durante el periodo de la III República francesa a través de la Ley de Separación Iglesia-Estado de 1905.

⁷ Artículo 10 de la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano: “Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley”.

⁸ VÁZQUEZ ALONSO, V. J., “Los perfiles jurídicos del modelo de laicidad francés”, *Laicidad y Constitución*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, p. 183.

Aun así, no se puede menospreciar la trascendencia del Concordato en cuanto a la consagración del pluralismo religioso y sus consecuencias en el ámbito del derecho civil que tanto interesan en este estudio. El Derecho privado quedará desligado de cualquier consideración religiosa, secularizándose el Derecho de familia, implantándose el matrimonio civil y la legalización del Divorcio.

Como había señalado anteriormente, la III República francesa es la que condujo a la verdadera laicización del Estado francés que culmina con la Ley de Separación Iglesia-Estado de 1905. Durante este periodo, se inicia un proceso continuador de la secularización con disposiciones como las de 1880 que suprimen la obligación del reposo dominical y se disuelve la Compañía de Jesús, en 1881 se desacralizan los cementerios, en 1884 el divorcio vuelve a ser legal, en 1886 se suprimen las facultades públicas de teología católica, se sustituyen los clérigos por personal laico en los hospitales y desaparecen los crucifijos de centros de enseñanza y tribunales.

Especial trascendencia tuvo la Ley de 28 de marzo de 1882 que configura una escuela obligatoria, gratuita y laica donde se sustituye, en la educación primaria, la educación religiosa por la educación moral y cívica.

El objetivo de la laicización de la enseñanza era la de crear un ciudadano libre, autónomo e independiente. El problema es que continuaban existiendo escuelas privadas en manos de congregaciones religiosas hostiles a la República. Es la Ley de 7 de julio de 1904 la que pone fin a este obstáculo, para lograr la autonomía del individuo, porque prohíbe a las congregaciones religiosas desempeñar tareas de enseñanza.

Finalmente, la Ley de Separación Iglesia-Estado de 1905 consagró jurídicamente el Principio de laicidad del Estado. Dicho principio se configuraría del siguiente modo: habrá que distinguir una vertiente positiva, que consiste en el reconocimiento de la libertad religiosa y, una vertiente negativa, que consagra la separación de la Iglesia y el Estado.

Dentro de la vertiente positiva, mencionar la libertad religiosa implica estudiar un concepto más amplio que incluye la libertad de conciencia y la libertad de culto. Mientras que la libertad de conciencia podría definirse como la libertad para construir la propia visión del mundo y del universo, así como para adherirse o no a una confesión o pensamiento religioso, la libertad de culto otorgaría la potestad para practicar individual

o colectivamente una religión⁹. La práctica del culto representaría la manifestación de la creencia religiosa y es en este punto donde el Estado se impone la obligación de actuar removiendo cualquier obstáculo que pudiera perturbar o impedir su ejercicio.

En su vertiente negativa, la laicidad, tal y como la configuró la Ley francesa de 1905, implicaría la Separación Iglesia-Estado que se concreta con la prohibición de cualquier tipo de reconocimiento o financiación por parte del Estado a las confesiones religiosas. La prohibición del reconocimiento público de las confesiones religiosas impide que el Estado pueda intervenir en los asuntos de las confesiones, cuyo funcionamiento puede regirse por su propio derecho. El poder público no será competente para entrometerse en aspectos como la organización interna de las confesiones, la organización del culto o en el estatuto de sus miembros.

En cuanto a la prohibición de financiación por parte del Estado es una exigencia lógica de la expulsión de la Iglesia católica del aparato institucional del Estado. Al ser ésta un elemento ajeno al poder público, el Estado no tiene la obligación de su sostenimiento económico.

Por otro lado, la separación Iglesia-Estado, a su vez, nos conduce necesariamente hacia la neutralidad del Estado que, por supuesto, no puede privilegiar a ninguna confesión, y se impone la prohibición de cualquier tipo de discriminación por motivos religiosos.

Se puede concluir afirmando que la implantación constitucional y legislativa del Principio de laicidad, en los términos descritos con anterioridad, implicará que “La religión abandona definitivamente el ámbito estatal para situarse de manera exclusiva en la esfera de la sociedad civil”¹⁰.

III. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931 Y SU CONFIGURACIÓN LAICA: LOS ARTÍCULOS 3 Y 43

El proceso de elaboración de la Constitución de 1931 y los factores ideológicos determinantes de su configuración laica

⁹ Ibídem.

¹⁰ Ibídem, p. 210.

Una vez analizados los orígenes del principio de laicidad, así como sus manifestaciones durante el periodo revolucionario y de la III República francesa donde se produce un proceso intenso de laicización del poder público, que culmina con la Ley de Separación Iglesia-Estado en 1905, así como la descripción del principio de laicidad como concepto jurídico, tanto en su vertiente positiva como negativa, estamos en condiciones de examinar la incorporación de dicho principio en la Constitución de la II República española. Posteriormente, se analizarán las principales consecuencias que dicha incorporación tuvo en el resto del ordenamiento jurídico y, muy en concreto, en uno de los ámbitos del Derecho privado de mayor trascendencia social y cultural como es el Derecho de familia y, en particular, en el régimen matrimonial.

La incorporación del principio de laicidad en la Constitución republicana, que determinaría la expulsión de la Iglesia de las nuevas instituciones democráticas, no sería fácil como quedó plasmado en el Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes de 1931. Numerosas cuestiones suscitaron largos debates en las Cortes republicanas, pero sin duda uno de los que más trascendencia tuvo fue el referido a la separación Iglesia-Estado y, en consecuencia, el reconocimiento constitucional del principio de laicidad del Estado republicano. La inclusión del artículo 3, que declaraba “El Estado no tiene religión oficial”, traería importantes consecuencias para la totalidad del ordenamiento jurídico.

Como ya habían afirmado los republicanos, su interés no solo era la transformación radical del Estado, del poder político, sino también de la sociedad española. Así lo reflejaron las palabras del diputado socialista Luis Araquistáin Quevedo, cuando afirmó que “para nadie es un secreto que aspiramos a una transmutación radical de los valores sociales”¹¹. Era una evidencia que la transformación social pasaba por la total expulsión de la Iglesia católica del poder público, y ello se consiguió tras la incorporación en la Constitución republicana del principio de laicidad, con todas sus manifestaciones, tanto en su vertiente positiva como negativa.

Aun así, el proceso secularizador del ámbito público no era suficiente para alcanzar la revolución moral de la sociedad española, que tanto ansiaban los republicanos. La transmutación de los valores morales solo podría lograrse si el fenómeno secularizador

¹¹ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 16 de septiembre de 1931, p. 641.

era más ambicioso, lo que supondría necesariamente intervenir en instituciones pertenecientes al ámbito de lo privado que la Iglesia católica había dominado durante años, como eran la familia y el matrimonio. Si el artículo 3 proclamaba la laicidad del Estado, fue el artículo 43, del capítulo II, del título III de derechos y deberes de los españoles, relativo a “Familia, economía y cultura”, el responsable de culminar con el proceso de laicización del Estado y de la sociedad.

Una vez celebradas las elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931, el Gobierno Provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, nombró una Comisión Jurídica Asesora, cuyo presidente fue Ángel Ossorio y Gallardo, con la tarea de elaborar un anteproyecto de Constitución. El Anteproyecto, que fue entregado al Gobierno el 6 de julio de 1931, fue calificado de moderado y su contenido con respecto a la Constitución que finalmente se aprobaría el 9 de diciembre de 1931, sería muy distinto.¹²

Ossorio y Gallardo dimitió de la presidencia de la Comisión Jurídica Asesora el 29 de julio, razón por la que el Gobierno Provisional decidió no presentar a las Cortes ningún proyecto de constitución, siendo finalmente una comisión parlamentaria de las propias Cortes la que elaborara el proyecto constitucional. La Comisión estuvo presidida por el jurista y miembro del Partido Socialista Obrero Español Luis Jiménez de Asúa, quien se encargaría el 27 de agosto de presentar ante las Cortes el Proyecto definitivo de Constitución con un articulado que, en lo que concierne a nuestro estudio, fue de especial relevancia pues suponía proclamar la laicidad del Estado y la secularización de la institución familiar y matrimonial.

Del análisis de los debates en las Cortes constituyentes fácilmente se podría aceptar la existencia de tres factores ideológicos que condicionaron en mayor o menor medida el contenido de la Constitución republicana, así como de la legislación que surgiría tras su aprobación, en lo relativo a su configuración laica.

La herencia del pensamiento ilustrado y de los postulados del liberalismo podría representar ese primer factor. El propio presidente del Gobierno Provisional, Alcalá Zamora, recién inauguradas las Cortes, defendió que el poder civil “es un poder que se

¹² NAVARRO DE LUJÁN, V.L., “La cuestión religiosa en el debate constituyente de 1931”, *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, 2009, p. 180.

yergue independiente, a la vez, de la coacción religiosa y de la amenaza del ejército”.¹³ Por otro lado, y haciendo referencia incluso a la Revolución francesa, el diputado monárquico Sanz Rodríguez, al criticar la radicalidad del proyecto constitucional, afirmó que, la Constitución “Está informada toda ella de un espíritu antirreligioso, de un espíritu jacobino”¹⁴. Son destacables las tan acertadas palabras del diputado Torres Barberá, de Esquerra Republicana de Cataluña, quien, en su discurso de 10 de septiembre, afirmó “vamos a darnos una constitución inspirada en los principios del liberalismo” y defendió la absoluta compatibilidad del “laicismo más puro y el espíritu de la religiosidad”.¹⁵

Un segundo factor ideológico estaría representado por las consideraciones izquierdistas con respecto al factor religioso, al que observan como un elemento negativo para la transformación de la sociedad, constituyendo la religión un método de opresión que aliena al hombre, que le priva de su voluntad y de su capacidad de acción para analizar la sociedad y transformarla. Así lo manifestó Melquiades Álvarez, del Partido Republicano Liberal Demócrata, cuando pronunció las siguientes palabras: “un Estado que tenga religión es un instrumento opresor de la conciencia del ciudadano.”¹⁶

Si la religión era considerada un elemento negativo para la transformación la sociedad, la Iglesia católica era la institución que representaba esa oposición a la transformación de la sociedad. Por ello se puede señalar, como el tercer factor ideológico que inspiró la Constitución Republicana, la hostilidad hacia la Iglesia. Esta hostilidad no fue fruto del capricho de las izquierdas, sino que podría justificarse por lo que había representado la Iglesia a lo largo de la Historia de nuestro país. La consideración de la Iglesia católica como reaccionaria, contrarrevolucionaria, opuesta al progreso social y cultural de la sociedad española, siendo la gran aliada de los representantes de un sistema oligárquico y caciquil, fue determinante. El diputado Luis Zulueta, en su intervención de 28 de agosto, hizo algunas manifestaciones donde responsabilizaba a la Iglesia católica de la monarquía absoluta y de la dictadura de la que había sido cómplice: “Es aquel viejo pacto entre el altar y el trono, que ahora parecer renovarse, que desde años se viene renovando, no solo entre el altar y el trono, sino entre el altar y el Poder, entre el altar y el pretorio, entre el altar y la caja de

¹³ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 28 de julio de 1931, p. 170.

¹⁴ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de septiembre de 1931, p. 799.

¹⁵ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 10 de septiembre de 1931, p. 849.

¹⁶ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de septiembre de 1931, p. 817.

caudales; y esa situación se ha agudizado durante los siete años últimos, durante el vergonzoso septenio en el cual los representantes de la Iglesia, las fuerzas que se llaman católicas, los periódicos, los diarios que se publican con censura eclesiástica, constituían, evidentemente, el más firme sostén de la monarquía absoluta y del despotismo dictatorial. Ni aun ante los mayores atropellos, ante las vejaciones más inciviles y más anticristianas se elevó una sola vez la protesta autorizada de los representantes de la Iglesia”.¹⁷

El diputado, además, hacía responsable del articulado laicista de la Constitución a la propia Iglesia Católica porque esos artículos secularizadores “Son la reacción natural del Estado; son la defensa lógica del Estado, no contra la religión” sino “contra aquellas fuerzas oscuras y reaccionarias que, tomando el nombre de la Religión, que llevando esa Cruz en el pecho, trabajan y han trabajado siempre contra los avances políticos. Se opusieron ayer al liberalismo; se oponen hoy al socialismo, y no dejan de conspirar contra la existencia misma de ese Estado moderno, de ese Estado civil, liberal y avanzado”.¹⁸

El debate del artículo 3

El 8 de octubre de 1931 comenzó el debate del artículo 3, que condicionaría el resto del articulado constitucional relativo a la laicidad del Estado y, en concreto, al asunto de la familia y el matrimonio. El presidente de la Cámara, Julián Besteiro, advirtió antes de comenzar el debate, temeroso ante la conflictividad del asunto a tratar, que los señores diputados debían ser lo más sintéticos posibles y raudos en sus intervenciones.¹⁹ A nadie sorprenden las palabras del Presidente al inicio del debate, a la luz de los exabruptos que habían pronunciado los diputados más tradicionalistas al respecto. Son dignas de mención las afirmaciones de Molina Nieto, del Partido Agrario, que ya en el debate a la totalidad del Proyecto de Constitución indicaría que, un precepto constitucional con ese contenido “da un golpe brutal a la familia; en la cual, no solamente se despoja de todo principio religioso, sino que, de aprobarse como está en el apartado primero del artículo dicho, constituiría verdaderamente un principio y un foco de disolución social”.²⁰ Apoyando las palabras del diputado ultraconservador, el señor

¹⁷ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 28 de agosto de 1931, p. 674.

¹⁸ *Ibíd.*

¹⁹ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de octubre de 1931, p. 1520.

²⁰ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 27 de agosto de 1931, p. 650.

Lamamié de Clairac, tradicionalista salmantino, diría que “La libertad de cultos, el laicismo del Estado, el quebrantamiento del vínculo matrimonial por el divorcio, la igualdad de los hijos legítimos e ilegítimos, el concepto mismo marxista de la propiedad, todo ello tiene el carácter que ayer le daba el Sr. Molina, de anticristiana, que ataca a las creencias religiosas de todos nosotros”.²¹

Producida la apertura del debate del artículo 3 por el Presidente de la Cámara, la primera intervención fue la del Ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, militante del Partido Socialista Obrero Español. El ministro defendió la laicidad del Estado como una exigencia lógica de la libertad de cultos, así como de la propia finalidad jurídico-civil del poder público porque “El Estado no puede solicitar del hombre ni emociones, ni sentimientos, ni creencias (...). Debe mantenerse alejado y neutral; es decir, el Estado tiene que ser aconfesional.”²² Por otra parte, insistió en que si el poder político se mantiene al margen de cualquier confesión religiosa, no se podrá imponer la obligación de financiarlas puesto que éstas no son más que comunidades de fieles. Serán éstos los que deban sostenerlas y no la totalidad de la ciudadanía de la República, a la que el Estado reconoce su libertad religiosa y de conciencia.

Otra de las consecuencias que a su juicio se inferían de la separación Iglesia-Estado, sería la imposibilidad de tutelar, organizar internamente o colaborar con las Iglesias. Por otra parte, hizo una profunda crítica a que la Iglesia fuera considerada una corporación de Derecho público por la República. Ello supondría la institucionalización o incardinación de la Iglesia en las estructuras del Estado, algo que nada tiene que ver con el principio de laicidad. En lo que respecta a las órdenes religiosas, abogó por la prohibición constitucional de que éstas ejercieran cualquier actividad económica, industrial o comercial.

Posteriormente, intervino el diputado de la derecha católica, Gil Robles, líder de Acción Nacional, quien ya había presentado sin éxito el 19 de agosto un voto particular²³ al Proyecto de Constitución, previo al debate parlamentario, junto con Jesús María Leizaola, del Partido Nacionalista Vasco. Con él pretendieron suprimir el artículo 3, objeto de discusión, así como constitucionalizar el concordato como forma de regular

²¹ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 28 de agosto de 1931, p. 665.

²² Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 14 de agosto de 1931, p.431.

²³ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 21 de agosto de 1931, Apéndice 7.º al Núm. 25, pp. 525-558.

las relaciones entre el Estado y la Iglesia, señalando a su vez que la religión católica era la que profesaban todos los españoles²⁴. El voto particular incluía menciones a la institución familiar, solicitando que se definiera ésta como la “institución básica de la vida social”²⁵ ya que temían que la secularización de la familia destruyera una institución que había estado dominada durante siglos por la moral católica.

En su discurso, el diputado católico, comenzó elogiando la labor de las Órdenes religiosas, definiéndolas como “verdaderos crisoles de patriotismo”²⁶. Continuó exponiendo su crítica a los artículos relativos a la disolución de las órdenes religiosas, indicando que la libertad e igualdad que proclama la Constitución “no existe para aquellos que, en nombre de un ideal que yo reputo sagrado, se agrupan para cumplir fines de cultura, de beneficencia y de patriotismo”²⁷.

En cuanto al artículo 3, el diputado consideraba que con él se proclamaba no la neutralidad, sino el laicismo de Estado. Aun así, y manteniendo su defensa del voto particular que presentó pidiendo la supresión de dicho artículo, podría llegar a asumir la neutralidad del Estado pero concretándose en preceptos específicos y siempre que se sustituyera la redacción del artículo 3 por la fórmula “No existe religión oficial”²⁸. Tampoco se opuso a aceptar el derecho a la libertad de conciencia incluido en el Proyecto de Constitución.

En lo referido a la separación Iglesia-Estado, se mostró partidario de la “relación de subordinación”²⁹ más que de la separación radical entre el poder temporal y el poder espiritual, a los que consideraba independientes, pero entre los que existe una importante conexión puesto que son los individuos los que se “someten a ambas potestades”³⁰.

La disolución de las Órdenes religiosas fue considerada por Gil Robles un atentado contra la libertad individual, concluyendo su discurso con la siguiente afirmación: “el

²⁴ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 21 de agosto de 1931, Apéndice 8.º al Núm. 25, pp. 525-558.

²⁵ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 21 de agosto de 1931, Apéndice 9.º al Núm. 25, pp. 525-558.

²⁶ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 18 de agosto de 1931, p. 440.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de octubre de 1931, p. 1528.

²⁹ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de octubre de 1931, p. 1529.

³⁰ *Ibidem*.

proyecto constitucional, tal como viene redactado en el dictamen, es un proyecto de persecución religiosa y, por consiguiente, nosotros en esas condiciones no podemos aceptarlo”³¹

El diputado Cirilo del Río, del Partido Republicano Progresista, expuso que la separación Iglesia-Estado era una exigencia lógica de la implantación de un régimen republicano y democrático, indicando que “en España, cuando ha venido la República, cuando se ha instaurado un sistema de gobierno republicano, es natural que los republicanos, los demócratas, los liberales españoles miren políticamente con recelo a la Iglesia y no crean que un Estado laico puede ir del brazo de la Iglesia, porque sería imposible la realización del ideal democrático: eso es todo. De modo que se impone la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado”³². Posteriormente, hizo una profunda crítica al radicalismo del artículo 24 del Proyecto de Constitución.

Rodríguez Piñero, calificándose de cristiano, y asegurando que los católicos habían “falseado el pensamiento de Cristo”, defendió fervientemente la separación Iglesia-Estado puesto que, “la separación de la Iglesia y el Estado es algo esencial al cristianismo; el cristianismo es la libertad de espíritu, y la libertad de espíritu no puede encarnar nunca en un poder temporal”³³. Seguidamente, anheló la disolución de la Compañía de Jesús porque había una “Orden en España que representaba todos los sectarismos, todos los vilipendios de la libertad; una Orden que no puede vivir y no puede perdurar entre nosotros, porque es la negación de esa misma libertad”³⁴.

El diputado García Gallego acusó al Proyecto de Constitución de anticlerical porque “con este artículo 3, lo queráis o no, dais la sensación a España entera de que expulsáis del Estado a la religión católica; de que expulsáis de las cumbres del poder público esa fe gloriosa que ha presidido el espiritualismo más grande que ha pasado por Europa y por toda la Historia universal”³⁵.

Humberto Torres Barberá, de Esquerra Republicana de Catalunya, entendía como una exigencia de coherencia que una República liberal y democrática no tuviera religión,

³¹ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 18 de agosto de 1931, p. 441.

³² Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de octubre de 1931, p. 1542.

³³ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de octubre de 1931, p. 1554.

³⁴ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de octubre de 1931, p. 1555.

³⁵ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 13 de octubre de 1931, p. 1658.

“no puede tener dogma alguno en ninguna de sus manifestaciones”³⁶. Pero no solo eso, sino que llegó a afirmar, en la línea de muchos de los grupos parlamentarios, que consideraba “necesario no solo la separación de la Iglesia y del Estado, sino la completa sumisión de la Iglesia ante la potestad del Estado”³⁷. Inmediatamente, abogó por la total supresión del presupuesto del clero porque “si el Estado no puede tener religión, el Estado tampoco puede subvencionar ninguna religión”³⁸.

La intervención del Ministro de Fomento, Álvaro de Albornoz Liminiana, miembro del Partido Republicano Radical Socialista, podría calificarse de contundente y drástica con respecto a la cuestión religiosa. En ella puede apreciarse verdaderamente el sentimiento de hostilidad hacia la Iglesia católica, que también condicionó en gran medida el contenido de la Constitución republicana. Señalaba que “La Iglesia española ha tenido sojuzgado al Poder civil; los reyes y los grandes de España besaban humildemente, no ya la sandalia del Papa, sino la sobrepelliz de un clérigo; la Iglesia ha ejercido un poder omnímodo en nuestro país, en la vida civil, en la vida social, en la vida económica, en la educación pública, hasta el punto de que a ese influjo teológico de la Iglesia en el alma nacional se deben, Sres. Diputados, todas las taras, las principales taras de nuestro carácter (...)”³⁹. Y por ello propugnaba la radical separación Iglesia-Estado, porque la Iglesia “no podrá inmiscuirse ni en la vida del Estado, ni con miras políticas en la vida social, ni mucho menos perturbar al país con amenazas de guerras civiles, de que con tanta frecuencia se habla en este recinto, y en lo que yo no creo, en lo más mínimo, porque me parece un absurdo y un fantasma.”⁴⁰.

Se mostró contrario a someter a la Iglesia al régimen jurídico de Corporación de Derecho público porque ello no implicaba la separación del Estado, sino su subordinación. En cuanto a la posibilidad de reconocer la libertad de enseñanza, indicó que la educación debía ser una función exclusiva del Estado ya que “La bandera de la libertad de enseñanza (...) no es sino una bandera clerical”⁴¹ con el objetivo de someter a la sociedad a través del adoctrinamiento.

³⁶ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de octubre de 1931, p. 1559.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de octubre de 1931, p. 1563.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 9 de octubre de 1931, p. 1564.

También se opuso al sostenimiento del culto y a favor de la disolución de algunas órdenes religiosas como los Jesuitas a quienes define como “captadores de herencias, aliados de la plutocracia, grandes accionistas de bancos y editores de periódicos reaccionarios.”⁴².

El Presidente del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá Zamora, vino a moderar el debate con el objetivo de evitar la ruptura de la República con la Iglesia, que tan graves consecuencias podría acarrear. Criticó la prohibición de auxilio o colaboración económica del Estado a la Iglesia porque ello supondría entre otras cosas la pérdida del patrimonio artístico. Por otro lado, no comprendía la prohibición de la vía concordataria para definir las relaciones del Estado español con la Iglesia católica, entidad que por sus características precisaba de instrumentos de derecho internacional de mayor complejidad para llegar a acuerdos con los Estados.

Por el contrario, Manuel Azaña, Ministro de la Guerra, identificó en su discurso el problema religioso con un problema político porque “El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal.”⁴³ En este discurso, aboga por la radical separación Iglesia-Estado, afirmando que España había dejado de ser católica no porque los ciudadanos ya no lo fueran mayoritariamente, sino porque a partir de ese momento tanto la Constitución como las leyes no estarían inspiradas por el espíritu del catolicismo y, por el contrario, lo estarían por el espíritu de la democracia y de las libertades. En su discurso, además, defendió la supresión del presupuesto del clero, la disolución de aquellas órdenes religiosas que tengan un cuarto voto de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado y una enseñanza exclusivamente laica.

En los debates también se escucharon posturas tan reaccionarias como las de Joaquín Beunza Redín, de la minoría vasco-navarra, que defendía la confesionalidad del Estado afirmando que “no solo es lógico que el Estado tenga religión, sino útil y conveniente, y como en España, pese a lo que se dice por algunos, la mayoría de la Nación es católica, creemos que, respondiendo al criterio de la mayoría, obligatoriamente debería tener el Estado ese mismo carácter católico, porque como nosotros entendemos que el

⁴² NAVARRO DE LUJÁN, V.L., “La cuestión religiosa en el debate constituyente de 1931”, *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, 2009, p. 205.

⁴³ Discurso 14 de octubre de 1931.

catolicismo es perfección, ¡qué duda cabe que esa perfección, que la queremos atribuir al individuo, la queremos también atribuir al Estado!.”⁴⁴

Finalmente, el artículo 3 quedó aprobado con el siguiente contenido: “El Estado español no tiene religión oficial”. Sin embargo, aunque con él se puede aceptar que se inserta en el texto constitucional el principio de laicidad del Estado, dicho principio, necesariamente, debe completarse con otros preceptos constitucionales, de semejante importancia, que conformarían definitivamente lo que podríamos denominar como el bloque de laicidad de la Constitución republicana de 1931.

Este bloque normativo, conformador del principio de laicidad, tanto en su vertiente positiva como negativa, estaría constituido por el artículo 3, el artículo 25 que prohíbe la discriminación por motivos religiosos, el artículo 26 que define el régimen jurídico de las confesiones religiosas que pasarán a ser meras asociaciones, extingue el presupuesto del clero, disuelve órdenes religiosos como la Compañía de Jesús y prohíbe a las órdenes religiosas el ejercicio del comercio, industria o enseñanza. También, se incluiría de manera imprescindible el artículo 27, que proclama la libertad religiosa, incluyendo inexorablemente en su contenido la libertad de conciencia y de culto. Este mismo artículo desacraliza los cementerios.

Todo este conjunto de preceptos configurarían la Constitución republicana de 1931 como una constitución verdaderamente laica, cumpliendo así con el patrón y las exigencias que estableció la Ley de Separación Iglesia-Estado de la III República francesa de 1905, con la que se consagraba jurídicamente el principio de laicidad.

Consecuencia directa de la incorporación de todo este bloque normativo laicista, junto con el objetivo de los republicanos y socialistas de transmutar radicalmente los valores sociales, formaba parte del Proyecto de Constitución el artículo 43 relativo a la familia, matrimonio y filiación.

El debate del artículo 43

Ya en su intervención en defensa del artículo 3, Fernando de los Ríos había hecho mención de la consecuencia lógica que este artículo tenía en el asunto familiar y

⁴⁴ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 10 de octubre de 1931, pp. 1626-1627.

matrimonial porque “lo hecho hasta hoy es libertad de cultos y secularización relativa, faltando aun cuanto concierne a la sustantividad del matrimonio civil y a la secularización de cementerios.”⁴⁵

El diputado Martínez de Velasco, del Partido Agrario Español, comenzó identificando a la familia como un ente de protección y auxilio, afirmó que el nuevo concepto de familia, que construía el artículo 43, suponía un atentado contra su propia esencia.⁴⁶ Sorprendentemente, el diputado del Partido Republicano Radical, José López Varela, defendió la disolución del matrimonio siempre que fuera por causas que una ley posterior recogiera, oponiéndose por tanto, a la incorporación del divorcio libre en el texto constitucional porque “esta idea no está arraigada en el espíritu de la mujer española y, además, ésta, a pesar del sacrificio que para ella significa el matrimonio, es profundamente respetuosa con él.”⁴⁷

La intervención del diputado Cirilo del Río, del Partido Republicano Progresista, fue instructiva en cuanto definía el concepto de familia, que consagraba el texto constitucional, señalando que la nueva familia ya no se consolida con el matrimonio, por un contrato o sacramento, sino que es una familia que nace de “la sangre, de la naturaleza, de la generación, concepto que tiene adhesión y el aplauso de todos los hombres sinceramente liberales”.⁴⁸ Si la familia se basa en las relaciones de consanguinidad, a nadie extraña, defiende el orador, que se equiparen los hijos matrimoniales a los extramatrimoniales.

Defendió, a su vez, el matrimonio como un contrato indefinido que podría romperse, porque de lo contrario “sacrificar la felicidad puede constituir un error o una equivocación”⁴⁹. Aunque defiende un matrimonio ajeno a cualquier consideración religiosa o católica, se opone fervientemente a incluir el divorcio libre en el Proyecto de Constitución, lo que considera un gravísimo error.

El señor Ovejero, del Partido Socialista Obrero Español, se refiere explícitamente no al divorcio, sino al matrimonio civil⁵⁰, indicando que hubo ya un intento en 1906 cuando, por una Real Orden, se determinó que no era necesaria declaración de

⁴⁵ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de octubre de 1931, p. 1521.

⁴⁶ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de octubre de 1931, p. 1532.

⁴⁷ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de octubre de 1931, p. 1537.

⁴⁸ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 8 de octubre de 1931, p. 1539.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 10 de octubre de 1931, p. 1625.

acatolicidad por los contrayentes que desearan celebrar matrimonio civil. Así que el matrimonio civil no era algo tan novedoso y rupturista.

Con anterioridad al propio debate de estos artículos, se habían emitido votos particulares a los mismos por parte de los diputados Leizaola, del Partido Nacionalista Vasco, y Gil Robles, de Acción Nacional, por considerar que el artículo 43 era un “ataque rudísimo contra la misma institución familiar”.

Hubo otro voto particular del Señor Castrillo, en el que defiende que sería conveniente excluir las cuestiones relativas a familia y matrimonio del texto constitucional, para que se lleve a cabo su regulación a través del posterior desarrollo legislativo modificándose el Código Civil.⁵¹

Este último voto, no sorprende puesto que fue una crítica común de gran parte de los diputados, la incorporación en el texto constitucional de las causas del divorcio o de las obligaciones paterno filiales, entre otros. Consideraron que, incorporar semejantes aspectos de tal especificidad en el texto constitucional, que es la norma que preside el ordenamiento jurídico, era un error y un absurdo desde el punto de vista jurídico constitucional.

Incluso, en la Sesión del 15 de octubre, intervino el diputado Ossorio y Gallardo, quien había sido presidente de la Comisión Jurídica Asesora, para sumarse al voto particular que presentó Leizaola y Gil Robles, por el que solicitaban eliminar la disolubilidad del matrimonio del texto constitucional. Expone que el proyecto constitucional regula el matrimonio como una verdadera institución contractual y secular. No se opone a esa visión secularizadora del matrimonio, pero sí en cuanto a su libre disolución. Si el matrimonio es un contrato, no debe existir la posibilidad de romperse por voluntad de cualquiera de los cónyuges porque entonces estamos ante un “contrato ínfimo y deleznable.”⁵² Por otra parte, incorporar el divorcio en el texto “dejará destrozado el prestigio de la Constitución”⁵³, abogando por su posible inclusión en las leyes civiles.

⁵¹ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 25 de agosto de 1931, Apéndice 10. ° al Núm. 26, pp. 559-588.

⁵² Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 15 de octubre de 1931, p. 1746.

⁵³ *Ibíd.*

Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical, en su intervención posterior a la del Señor Ossorio, criticando la posición defendida por éste, planteó que la secularización del matrimonio y la inclusión del divorcio en el texto constitucional eran una exigencia del principio de laicidad incorporado ya en la Constitución.⁵⁴ Y no solo eso, sino que el matrimonio debía ser civil porque solo los tribunales civiles deben ser los competentes para conocer de cualquier cuestión referida tanto al matrimonio como al divorcio. Si no se incorpora el divorcio en el texto constitucional, afirmaba, todo quedará en manos de una ley civil que puede no aprobarse.

Finalizados los debates y aprobado el artículo 43, se consagraba una familia tutelada por el Estado y, un matrimonio en el que los cónyuges disfrutaban de los mismos derechos y obligaciones, que podía disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de ellos siempre que alegaran justa causa. Este precepto imponía constitucionalmente obligaciones a los progenitores con respecto de sus hijos en cuanto a alimentación, asistencia y educación se refiere, y se eliminaba la diferenciación jurídica entre los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, teniendo el padre las mismas obligaciones para con ambos. La República, a su vez, asumía las obligaciones de asistencia y tutela de enfermos y ancianos, así como la protección de la maternidad e infancia.

IV. LAS SINGULARIDADES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931 Y LAS CRÍTICAS DE LA DOCTRINA JURÍDICA

La Constitución de la II República española fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 con un contenido que, en cuanto a su configuración laica se refiere, ha quedado expuesto anteriormente.

Con ese afán de democratizar la vida pública, de garantizar la plena libertad de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad, se plasmó definitivamente en la Constitución republicana el espíritu democrático, liberando a la sociedad española del yugo de catolicismo reaccionario, estableciendo la radical separación Iglesia-Estado, y el principio de laicidad. Se pretendía alcanzar la revolución cultural y moral en una sociedad que, hasta el momento, había estado dominada por los valores judeocristianos.

⁵⁴ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 15 de octubre de 1931, p. 1748.

Como dijo Luis Jiménez de Asúa: “Si la República no hubiera venido para mudar lo todo, no merecería la pena haberla traído.”⁵⁵

La incorporación en la Constitución de un artículo tan revolucionario como el 43, que proclamaba la igualdad de derechos para ambos cónyuges e instauraba constitucionalmente el divorcio, no estuvo exenta de las críticas de juristas y políticos una vez aprobado el texto constitucional. La creación de este nuevo concepto de familia, que supuso la “afirmación democrática y liberal, el sentido laico, la emancipación femenina y filial y la orientación social de la propiedad y cultura”⁵⁶, fue el origen de numerosos comentarios. El que fuera Presidente del Gobierno Provisional, durante el periodo de elaboración de la Constitución republicana, Niceto Alcalá Zamora, propuso, varios años después de la aprobación del texto constitucional, la reforma del artículo 43 defendiendo que “La inclusión del divorcio entre las normas, o instituciones constitucionales, es indefendible, desde el punto de vista neutro, del método racional (...). Eso tiene su lugar en los Códigos civiles, pero no en el Código político fundamental.”⁵⁷

Añade a sus consideraciones jurídicas, razones de carácter ideológico o moral exponiendo que “soy, y lo declaro sin temor a que me llamen retrogrado, uno de los adversarios más resueltos del divorcio, que, en opinión de un insigne extremista, partidario de aquel, era la mala solución de un desdichado problema, que no tenía otra mejor”.⁵⁸ Con estas palabras se muestra contrario a la laicización de la familia constitucionalmente y clama a favor de la indisolubilidad de las uniones matrimoniales.

Alcalá Zamora, a su vez, fue crítico con el principio de laicidad y de separación Iglesia-Estado afirmando que “la neutralidad religiosa del Estado, que proclamó el art 3,

⁵⁵ ESCUDERO ALDAY, R. *Modelos de Democracia en España 1931-1978*, Península, Barcelona, 2013, p. 13.

⁵⁶ PÉREZ SERRANO, N., “Carácter de la nueva Constitución española”, *Revista de Derecho Público*, Madrid, 1932, 1, p. 15.

⁵⁷ ALCALÁ-ZAMORA, N. *Los defectos de la Constitución de 1931*, Imprenta de R. Espinosa, Madrid, 1936, p. 107.

⁵⁸ *Ibíd.*

quedó convertida en lo más opuesto a ella: en la persecución sanguinaria e implacable del culto, y en la proscripción de éste en la vida social”.⁵⁹

El constitucionalista Nicolás Pérez Serrano calificó la cuestión religiosa como “el problema de nuestra patria”⁶⁰ y defendió que la Constitución de 1931 se aproximaba a los principios marxistas. Refiriéndose al artículo 43, determinó que la “Igualdad entre cónyuges: es irrealizable en su integridad, por razones naturales; no cabe la fórmula “a cada cónyuge, lo mismo”, sino la de “a cada cónyuge, lo suyo” (Wiernszowsky), todo ello templado por sentimientos de comprensión, y evitando reminiscencias de sabor feudal; Igualdad en la filiación: los hijos ilegítimos no son culpables, y merecen amparo y protección, pero equiparados a los matrimoniales es matar la familia; Estímulos para el matrimonio: pueden llegar desde subvenciones o dispensas hasta concesión anticipada de voto, pero la obligación de casarse (los funcionarios públicos, por ejemplo) supone un remedio excesivo, y quizás nada fértil en resultados provechosos.”⁶¹

Por otra parte, el jurista Demófilo de Buen calificó la Constitución de revolucionaria, en cuanto a la regulación de la familia se refería, puesto que, haciendo un análisis exhaustivo del artículo 43, llegaba a la conclusión de que, un matrimonio con esas características “sin autoridad marital, sin transmisión de la legitimidad a los hijos, queda reducido a un vínculo, por cierto no muy fuerte, para el mutuo auxilio y la convivencia, y con ciertos efectos patrimoniales.”⁶²

Esta novedosa institución familiar chocaba radicalmente con el concepto de familia que Felipe Sánchez Román había defendido a principios de siglo. Describió la familia como “la forma social primera más natural e indispensable para la conservación y reproducción de la especie humana porque el individuo aisladamente considerado es imperfecto e insuficiente para sus propios fines.”⁶³ Se opuso fervientemente a la disolución del vínculo matrimonial porque para él la familia cumplía con unos fines

⁵⁹ ALCALÁ-ZAMORA, N. “La Constitución dañosa y deshecha, pero...definitiva”, *Obra completa. La Guerra Civil ante el Derecho Internacional; Régimen político de convivencia en España*, Parlamento de Andalucía, Sevilla, 2000, p. 110.

⁶⁰ PÉREZ SERRANO, N. “El problema de nuestra patria”, *Tratado de Derecho político*, Civitas, Madrid, 1976, p. 630.

⁶¹ PÉREZ SERRANO, N., “La familia”, *Tratado de Derecho político*, Civitas, Madrid, 1976, p. 688.

⁶² DE BUEN, D., “La legislación civil del nuevo régimen”, *Introducción al estudio del Derecho civil*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 224.

⁶³ SÁNCHEZ ROMÁN, F., “Estudios de Derecho Civil”, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1912, p. 8.

religiosos, morales, intelectuales, físicos, económicos y jurídicos y por tanto, a “la razón repugna y la moral condena que tal creación esté sometida al capricho, al arbitrio de uno ni de los dos contrayentes”.⁶⁴ Además, defendió la familia patriarcal puesto que “el padre tiene en la familia el deber de protección, asistencia, representación y conjunta o subsidiariamente lo tiene la madre puesto que ambos deben tener bajo su dirección la unidad del todo familiar para el bien de la familia misma, como de sumisión y obediencia de los hijos”.⁶⁵ El padre es “la personificación natural de la autoridad”⁶⁶, y la madre, “la más dulce personificación del amor y del sacrificio”⁶⁷.

Advertimos, pues, teniendo en cuenta las críticas proferidas por estos autores, que hubo un gran sector defensor de la familia, patriarcal y católica, y de la indisolubilidad del matrimonio. El sector más reaccionario, con el fin de desprestigiar la legislación republicana, incluso llegó a proclamar sin pudor el advenimiento del apocalipsis, afirmando que el derecho de familia “amenaza derrumbarse”, y que la familia estaba “amenazada de muerte”, fruto de “la difusión de las ideas anarquistas y comunistas.”⁶⁸

Es innegable que los preceptos que componen ese bloque de laicidad, junto con el artículo 43, supusieron un cataclismo jurídico y social que constituyen, al menos en el campo legislativo, el fin de la sociedad patriarcal. El matrimonio, reducido a un mero contrato, disoluble por mutuo disenso, sin autoridad marital, con un derecho de familia que equipara a los hijos matrimoniales de los extramatrimoniales, colisiona bruscamente con la familia católica y patriarcal, haciendo tambalear el sistema de valores judeocristiano. Aun así, aunque estos preceptos “descoyuntan el sistema familiar del Código civil”⁶⁹, eso no implica que la sociedad española se transformara radicalmente. De hecho, como auguró José Luis Díez Pastor, “Si el nuevo sistema familiar no arraiga en la conciencia del pueblo, sucumbirá.”⁷⁰

⁶⁴ *Ibíd.*, p. 25.

⁶⁵ *Ibíd.*, p. 38.

⁶⁶ BLANCO NÁJERA, F., “La función educativa de la familia, a la luz del derecho natural y de la legislación canónico-civil”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 1932, p. 35.

⁶⁷ *Ibíd.*

⁶⁸ CASTÁN, J., “Hacia un nuevo derecho civil”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 1, 1933, p. 32.

⁶⁹ Díez Pastor, J. L., “La familia y los hijos habidos fuera del matrimonio según la Constitución”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1933, 238-239, p. 193.

⁷⁰ *Ibíd.*

V. EL INFLUJO, EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL, DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931: EL NUEVO SISTEMA MATRIMONIAL

La radical separación Iglesia-Estado, la neutralidad religiosa del poder público, la libertad religiosa, de conciencia y culto así como el artículo 43 que conformaba un nuevo concepto de familia secularizado, condujo inexorablemente a la modificación del ordenamiento jurídico civil, en aspectos concretos del Derecho de familia como fue el sistema matrimonial. El proceso secularizador de la familia culminará con la aprobación, por las Cortes republicanas, de la Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932 que implanta un régimen de matrimonio civil, único y exclusivo.

Con respecto al concepto de régimen matrimonial escogido por un Estado, con carácter general, se puede afirmar que es “en el concreto sistema matrimonial adoptado por cada Estado, donde se resuelven cuestiones como el reconocimiento estatal (o su negativa o limitación) de la institución jurídica matrimonial configurada por los ordenamientos religiosos, la competencia jurisdiccional correspondiente, el reconocimiento de los efectos civiles a las concretas uniones matrimoniales contraídas al amparo del ordenamiento religioso, a las resoluciones referidas a esas uniones, etc.”⁷¹

De forma que el sistema matrimonial de un Estado, se clasificará en base al conjunto de criterios que establece el ordenamiento jurídico civil para regular la institución matrimonial, y que prescribirá la forma en que debe celebrarse en matrimonio para que despliegue efectos civiles.

Antes de comenzar a analizar el contenido de la Ley de 28 de junio de 1932, de Matrimonio Civil, resulta conveniente llevar a cabo el estudio de la evolución histórica del régimen matrimonial español. En primer lugar, es preciso señalar que, tras la aprobación de la primera Constitución democrática de 1869, que establecía la libertad de cultos y omitía cualquier tipo mención a la confesionalidad o aconfesionalidad del Estado, se promulgaba, el 18 de junio de 1870, la Ley Provisional de Matrimonio civil por la que solo se reconocía efectos jurídico-civiles al matrimonio celebrado en forma civil. Es con esta ley, con la que se produce una ruptura con respecto al régimen anterior puesto que, se puede afirmar con rotundidad, con anterioridad a esta disposición legislativa, el único matrimonio al que se le reconocían efectos civiles era al canónico.

⁷¹ DELGADO DE MIGUEL, J. F. “El matrimonio, realidad social e institución jurídica”, *Instituciones de Derecho Privado: Tomo IV, Familia*, Civitas, Madrid, 2001, p. 44.

Con el golpe del General Martínez Campos, el 29 de diciembre de 1874, se inicia la Restauración borbónica, produciéndose una modificación del régimen matrimonial. El Decreto de 9 de febrero de 1875 concedía eficacia jurídica retroactiva a los matrimonios canónicos celebrados desde la entrada en vigor de la Ley Provisional de Matrimonio Civil de 18 de junio de 1870. En cuanto al sistema matrimonial, reconocía efectos civiles al matrimonio canónico y también al civil pero de forma subsidiaria, para aquellos que declarasen no profesar la religión católica.

La labor codificadora, que finaliza el 24 de julio de 1889 con la promulgación del primer Código civil de nuestra historia, consagra en el artículo 42 un sistema matrimonial dualista, adquiriendo el matrimonio civil el carácter de subsidiario, accesible únicamente a aquellos que no profesaran la religión católica.

Este precepto disponía lo siguiente: “La ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico, que deben contraer todos los que profesen la religión católica, y el civil, que se celebrará del modo que determina este Código”. Para concretar el alcance del artículo 42, se dictó la Real Orden de 28 de diciembre de 1900, que señalaba que para contraer matrimonio en forma civil, bastaba con que uno de los contrayentes declarara ante la autoridad competente la no profesión de la religión católica.

Posteriormente, se dicta la Real Orden de 27 de agosto de 1906, con la que se produce un cambio de postura con respecto a la Orden de 1900. Esta nueva Orden disponía que no era exigible declaración alguna, en cuanto a la religión que profesan los contrayentes, para la celebración del matrimonio en forma civil. La disposición, redactada con este contenido, alteraría el sistema matrimonial que introdujo el Código civil de 1889 puesto que, si la declaración de acatolicidad no era necesaria para contraer matrimonio en forma civil, quedaba abierta la posibilidad de que los contrayentes decidieran celebrar matrimonio en forma civil o canónica, con independencia de la religión que profesaran. Se estaría así vulnerando lo dispuesto en el artículo 42 del Código civil, del que se evidencia que el sistema matrimonial que estableció era dualista, canónico principalmente, y subsidiario en la forma civil.

Con el objetivo de restablecer la plena vigencia y eficacia del artículo 42 del Código civil, se dictó la Orden de 28 de Febrero de 1908, que derogaba la anterior de 27 de agosto de 1906. La orden de 1908 de nuevo señala la exigencia de prestar declaración

de acatolicidad ante la autoridad competente, de al menos uno de los contrayentes, para que se hiciera posible la celebración del matrimonio civil.

El sistema descrito anteriormente fue el vigente hasta que se instaura la II República española, con la que se produce una verdadera alteración. El Gobierno de la República dictó la Orden de 10 de febrero de 1932⁷², firmada por el Ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz. Esta Orden, calificada por algunos juristas como “contradictoria, innecesaria e ineficiente”⁷³, derogaba la de 28 de diciembre de 1900, indicando que aquellos que desearan contraer matrimonio en forma civil no tenían obligación de realizar ningún tipo de declaración con respecto a sus creencias religiosas. Con tal disposición se retorna al sistema matrimonial facultativo, de libre elección, en el que tanto el matrimonio canónico como el civil tendrán plenos efectos civiles. La propia Orden determinó que este sistema matrimonial estaría vigente hasta que se aprobara la Ley de Matrimonio Civil por la Cortes republicanas unos meses más tarde.

Durante el primer semestre del año 32, en las Cortes se produjo el debate de asuntos de tal enjundia como fueron el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley para la Reforma agraria. Aun así, el Parlamento tuvo tiempo para debatir, muy brevemente, en la Comisión de Justicia y aprobar, finalmente, la Ley de Matrimonio Civil.

El Proyecto de ley⁷⁴ fue presentado a las Cortes por el Ministro de Justicia, el 11 de mayo de 1932, y firmado por el que fuera en ese momento Presidente del Gobierno de la República, Niceto Alcalá Zamora. En el Preámbulo se califica este proyecto de necesario porque, a juicio del Gobierno, aun subsistían preceptos en la legislación civil que entraban en contradicción con la Constitución vigente, que es la Constitución de un “Estado Republicano y laico”. La existencia de disposiciones jurídico-civiles, que regulaban un sistema matrimonial que dividía entre creyentes y no creyentes, entraba en conflicto con el principio de laicismo que propugnaba el Estado republicano. Aduce el Gobierno que, existe en la Constitución un precepto que de forma taxativa señala que “no puede ser fundamento de privilegio jurídico las creencias religiosas y a su vez señala que la condición religiosa no modifica la personalidad civil”. De forma que, todos los preceptos del Código Civil que hagan mención o tengan “algún tipo de

⁷² Anexos: II. Orden del Ministerio de Justicia de 16 de Febrero de 1932.

⁷³ DELGADO IRIBARREN, F. “El Derecho de Familia en la Constitución de la República Española de 1931”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1932, 222, p. 65.

⁷⁴ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 11 de mayo de 1932, Apéndice 5. ° al Núm. 163, pp. 5505-5532.

inspiración religiosa” habrían quedado ya derogados, directamente, por el texto constitucional sin necesidad de una nueva ley. A pesar de ello, continuaba el Preámbulo indicando que existían disposiciones que, aun habiendo sido derogadas por la propia eficacia jurídica de la Constitución como norma suprema, continuaban aplicándose. Además, el Gobierno defendió que siempre habría podido dictar disposiciones para solventar tal situación de antinomia jurídica, sin embargo consideraba conveniente aprobar este proyecto de ley por respeto a la Soberanía popular y a las Cortes de la República.

A propósito de la sanción que impuso el Gobierno republicano al Cardenal Pedro Segura, por sus manifestaciones contrarias al laicismo republicano, al matrimonio civil así como al orden constitucional mismo, se produjeron las intervenciones de algunos diputados que aprovecharon para criticar tanto la sanción como el Proyecto de Ley de Matrimonio Civil. El diputado Santiago Guallar Poza, de Acción Nacional, expuso que el matrimonio es un sacramento y, por ello, celebrarlo siguiendo los preceptos que marca el Derecho civil ante un funcionario no es matrimonio por no adquirir la condición de sacro. Afirmó que “El matrimonio civil para los cristianos es un vergonzoso y execrable concubinato.”⁷⁵ Se mostró, por tanto, profundamente crítico con la secularización del matrimonio porque “siendo el matrimonio una cosa sagrada, su ordenación, su jurisdicción pertenece plena y exclusivamente, como la de todas las cosas sagradas, a la Iglesia, y toda injerencia del Poder civil en esa materia es una usurpación sacrílega.”⁷⁶ Incluso, lo llegó a calificar de atentado contra la propia libertad de conciencia porque está obligando a los católicos a “celebrar un acto que repugna su fe, un acto que ellos consideran completamente nulo.” Ante semejantes afirmaciones, Miguel de Unamuno, desde su asiento, interrumpió aclarando que “No les obliga. Pueden casarse solo por la Iglesia, si quieren”⁷⁷.

El Ministro de Justicia hubo de responder a las palabras de los diputados tradicionalistas, así como a las que el Cardenal Segura había escrito en su Pastoral, y es que éste último afirmó que “El llamado matrimonio civil no es verdadero y legítimo matrimonio; es solamente barraganía o concubinato”. “Los que solo se casan civilmente, no son marido y mujer ni están casados de verdad”.

⁷⁵ Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 17 de junio de 1931, p. 6287.

⁷⁶ *Ibídem*.

⁷⁷ *Ibídem*.

Para el Ministro, las palabras del Cardenal eran inciertas porque si la Iglesia consideraba que el matrimonio civil es un concubinato, podría casar canónicamente a los ya casados civilmente y esto es considerado herejía por ella misma. La Iglesia, por tanto, reconocería al matrimonio civil como vínculo legítimo.

La conclusión de las brevísimas discusiones se produce el 16 de junio, fecha en que se aprobó definitivamente el Proyecto de Ley relativo al Matrimonio Civil y fue el 28 de junio la fecha en que se promulgó la Ley de Matrimonio Civil por las Cortes Republicanas.

VI. EL CONTENIDO DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL DE 28 DE JUNIO DE 1932

La nueva Ley⁷⁸, que aprobaban las Cortes Republicanas, con una redacción escueta constando tan solo de 6 artículos, venía a establecer en su artículo primero un nuevo sistema matrimonial, que únicamente reconocía efectos jurídicos al matrimonio celebrado en forma civil. De este modo, se modificaba directamente el articulado del Código Civil.

En cuanto a libertades individuales, eliminaba la obligación que, conforme al artículo 45.1 y 47 del Código Civil, tenían las personas mayores de edad de obtener y acreditar consejo paterno para la celebración de matrimonio. En el caso de los menores de edad que desearan contraer matrimonio, el nuevo texto exigía que la licencia paterna se acreditara mediante documento firmado por notario o por el funcionario o juez municipal ante quien debiera celebrarse el matrimonio.

Elemento revolucionario para la emancipación de la mujer fue, sin duda, la eliminación de una de las formalidades de la celebración del matrimonio. La nueva disposición legislativa señalaba que la forma de celebración del matrimonio continuaría rigiéndose por lo establecido en el artículo 100 del Código Civil, pero se omitiría la lectura del artículo 57 que rezaba: “El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido”. También, fruto del principio de igualdad y de no discriminación, junto con el principio de laicidad, se suprimía el artículo 83.4 del Código Civil que impedía

⁷⁸ Anexos: III. Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932. Publicada en la Gaceta de Madrid de 3 de julio de 1932.

contraer matrimonio a los ordenados in sacris y a los profesos en una orden religiosa ligada al voto de castidad.

Otra consecuencia más del principio de laicidad constitucional, que implicaba la radical separación Iglesia-Estado, fue la expulsión, que esta Ley consagra, de la Iglesia Católica de las Instituciones públicas. A partir de su vigencia, sería exclusivamente el Juez de Primera Instancia al que le correspondía dispensar cualquier clase de impedimento para la celebración del matrimonio como podían ser los de consanguinidad o afinidad.

Por otro lado, cualquier controversia relativa a la validez o nulidad de los matrimonios ya celebrados pasaban a ser competencia exclusiva de la Jurisdicción Civil. Así mismo, las cuestiones relativas a la validez o nulidad de los matrimonios canónicos celebrados con anterioridad a la vigencia de la ley serían igualmente competentes los tribunales civiles, que aplicarían las leyes canónicas que rigieron necesariamente la celebración de dichos matrimonios. Con respecto a los Registros civiles, asumían con exclusividad la expedición de cualquier documento necesario para la celebración de matrimonio. La República tampoco reconocería, a partir de ese momento, las sentencias emanadas de Tribunales Eclesiásticos de forma que éstas no producirían ningún tipo de efecto jurídico civil.

Para concluir, el artículo 6, con un contenido derogatorio, señalaba que con independencia del rango quedarían derogadas cuantas disposiciones se opusieran al contenido de esta ley.

Relativo a la inscripción de los matrimonio en el registro civil, se dictaron dos Órdenes del Ministerio de Justicia el 14 de julio y el 19 de agosto de 1932.

La Ley, que entró en vigor tal y como ella misma disponía 30 días después desde su publicación en la Gaceta de Madrid, antiguo Boletín Oficial del Estado, estuvo inspirada por el principio de laicismo constitucional que informó todo el proceso secularizador llevado a cabo por los republicanos. La Ley de matrimonio civil culminó con la radical separación Iglesia-Estado en cuanto a la materia matrimonial y familiar se refiere, expulsando a la Iglesia católica de las administraciones públicas. Pero no solo eso, sino que con ese afán de transformar la sociedad en todos sus aspectos, suprimió

del Código civil artículos de contenido paternal, patriarcal y machista que representaban un freno para la emancipación de la mujer, para la igualdad y la justicia social.

La Iglesia Católica fue la gran perdedora de todo este proyecto secularizador. La República le arrebató el control moral y espiritual de la sociedad, que la dictadura militar le devolvió.

VII. LOS COMENTARIOS DE LA DOCTRINA JURÍDICA AL RESPECTO DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL DE 28 DE JUNIO DE 1932

Una de las principales cuestiones que trató la doctrina jurídica, al respecto del sistema matrimonial que se adoptó tras la Ley de Matrimonio Civil, giraba en torno a si el régimen impuesto era una exigencia de la lógica jurídico-constitucional, como el propio Ministro de Justicia afirmaría en el Proyecto de Ley que presentó a las Cortes, o si dicha Ley constituyó una decisión política y democrática más de las Cortes Republicanas.

El artículo 43 de la Constitución, aunque secularizaba la familia, no constitucionalizaba un régimen matrimonial específico, porque ni siquiera lo mencionaba. Aun así, hubo autores que defendieron que sin lugar a dudas “no era posible conservar en nuestra Patria, bajo el régimen de separación de la Iglesia y del Estado, y consiguientemente, neutralidad religiosa de éste, establecido por la Constitución nueva, el sistema matrimonial del Código civil.”⁷⁹. A pesar de ello, indicaron que siempre habría existido la posibilidad de aceptar un régimen matrimonial de libre elección, en el que los contrayentes eligieran conforme a sus convicciones la forma de celebración de matrimonio. Esto, a su juicio, no habría supuesto perjuicio alguno para los intereses del Estado.

Otros autores, defendieron que aunque los preceptos constitucionales “descoyuntan el sistema familiar”⁸⁰ del Código Civil, no lo sustituyen por otro porque “No es posible sustituir el derecho de familia del Código civil por un solo artículo de la Constitución. Mucho menos puede admitirse que quede derogado sin nada que lo sustituya. Por este camino llegaríamos a la absoluta incertidumbre del Derecho y al imperio de la

⁷⁹ CASTÁN, J., “Hacia un nuevo derecho civil”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 1933, 2, p. 189.

⁸⁰ DIEZ PASTOR, J. L., “La familia y los hijos habidos fuera del matrimonio según la Constitución: El Derecho de Familia en la Constitución”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1933, 238-239, p. 193.

arbitrariedad”. Incluso, afirmaron que tanto el divorcio como el matrimonio exclusivamente civil “no fueron una realidad hasta que se pusieron en vigor las leyes respectivas”⁸¹.

Un sector de la doctrina, reconociendo igualmente que la Constitución no obligaba al establecimiento del sistema de matrimonio civil único, entendían que si la Constitución consideraba a la Iglesia como una mera asociación, constituiría un contrasentido otorgarle eficacia jurídica a sus actos así como considerar al sacerdote, que preside el rito matrimonial, fedatario público cuando está actuando con “arreglo a unas normas extrañas al ordenamiento jurídico”⁸². Sin embargo, este grupo apoyaba la idea de que la propia Constitución derogaba “todo lo que el Código dispone sobre el matrimonio canónico y todo lo que en él daba valor a la intervención de las autoridades eclesiásticas (...)”⁸³. Llegarían a afirmar que la Ley de 28 de junio de 1932 no era ni siquiera necesaria, y que todos los matrimonios celebrados en forma canónica, posteriores a la aprobación de la Constitución serían nulos y la inscripción en el Registro no los convalidaría.⁸⁴ De forma que, tomando en consideración el artículo 3 y el artículo 43, que dan a la familia un carácter estatal y por tanto laico, defendieron que “desde el momento de promulgarse la Constitución, solo una clase matrimonio, el civil, tendría validez jurídica, siendo nulos ante Derecho todos los que se contrajesen en forma canónica.”⁸⁵

A pesar de estas últimas consideraciones, es la Ley de 28 de junio de 1932 la que contradiría dichos análisis jurídicos, ya que señalaba que solo reconocía una única forma de matrimonio, la civil, pero a partir de su entrada en vigor. Es así como el legislador, sin hacer referencia a los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, reconocería su validez desde la aprobación de la Constitución de 1931 hasta la promulgación de la Ley de Matrimonio Civil. Luego, sería un juicio muy discutible señalar que de la propia Constitución nacía la obligación de regular un régimen matrimonial exclusivamente civil.

⁸¹ *Ibíd.*, p. 198.

⁸² GONZÁLEZ PALOMINO, J. “Valor civil de las normas constitucionales”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1933, 243, p. 403.

⁸³ *Ibíd.*

⁸⁴ *Ibíd.*

⁸⁵ DE CASTRO, F., “El Derecho Civil y la Constitución”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1935, 257, p. 46.

En cuanto a la clase de régimen matrimonial escogido por las Cortes republicanas, fue objeto de defensa por parte de la doctrina que, entendió que mantener el sistema matrimonial del Código civil de 1889 se hacía imposible por el propio contenido constitucional. Aun así, dicha situación no implicaba que necesariamente se tuviera que escoger un sistema matrimonial exclusivamente civil.

La nueva familia y, el matrimonio como pacto disoluble, fue criticado por los más tradicionalistas. Para ellos, la novedosa regulación suponía demoler la familia tal y como se la había conocido hasta el momento puesto que pretendía “conseguir que se equiparen los cónyuges, tanto es sus relaciones personales como en las patrimoniales, y facilitar el divorcio. En el afán de aproximar la situación jurídica de los hijos ilegítimos lo más posible a la de los legítimos, se manifiesta también hoy indirectamente la tendencia a asemejar las relaciones sexuales extramatrimoniales a las existentes en el matrimonio.”⁸⁶

Incluso llegaron a afirmar que la política legislativa imperante seguía el ejemplo de la legislación soviética porque para el bolchevismo “La religión y el Derecho son ideologías propias de clases explotadoras”⁸⁷ y se dijo que la familia estaba “muy afectada y debilitada por la civilización moderna, de tipo urbano y tendencias hedonistas.”⁸⁸

Sin generar ningún tipo de sorpresa, el sector eclesiástico consideró esta Ley “una injuria gravísima a la Iglesia y un agravio tremendo a los sentimientos religiosos del pueblo español. Quiso quitar al matrimonio de los cristianos el carácter sagrado que le imprimió su Divino fundador.”⁸⁹ Habría que recordar la opinión que tenía el Vaticano a principios de siglo con respecto al matrimonio civil manifestada por León XIII, para el que una ley de matrimonio civil “es una ley que usurpa los derechos de la Iglesia, pone obstáculos a su acción saludable y estrecha más las cadenas, con grave detrimento de las almas. Lesiona la justa libertad de los ciudadanos y de los fieles, favorece y sanciona las uniones ilegítimas, abre el camino a nuevos escándalos y a desordenes morales.

⁸⁶ CASTÁN, J., “Hacia un nuevo Derecho Civil”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 1933, 1, p. 31.

⁸⁷ POLO, A., “Las transformaciones del Derecho Privado”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1934, 254, p. 356.

⁸⁸ CASTÁN, J., “Hacia un nuevo Derecho Civil”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 1933, 2, pp. 185-187.

⁸⁹ DEL AMO, L., “Los matrimonios civiles durante la República. Problemas que plantean”, *Editorial Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1954.

Perturba la paz de las conciencias y hace más agudo el conflicto entre la Iglesia y el Estado (...).”⁹⁰

VIII. LA SUBLEVACIÓN MILITAR DE 18 DE JULIO DE 1936 Y LA GUERRA CIVIL: LA LEGISLACIÓN MATRIMONIAL DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO

La España dividida

El texto constitucional de 1931, como norma suprema del ordenamiento jurídico, creaba un nuevo orden republicano, democrático y laico que venía a transformarlo todo, tanto el Estado como el conjunto de la sociedad española a través también del posterior desarrollo legislativo. En palabras de Santos Juliá se vendrá a construir así la nueva sociedad.⁹¹

El esfuerzo de los republicanos quedó frustrado tras la insurrección militar de 18 de julio de 1936. Un grupo de generales del Ejército de la República se sublevaron contra el régimen constitucional, democrático y legítimo establecido tras la Constitución de 1931. El territorio nacional quedó bajo el dominio de dos entes de poder: por un lado la zona insurrecta quedó dominada por los militares golpistas, que se agruparon en la Junta de Defensa Nacional que sería el organismo colegiado para la toma de decisiones. Por Decreto de 29 de septiembre de 1936 de la citada Junta, se nombraba Jefe del Gobierno del Estado español al General Francisco Franco, asumiendo éste todos los poderes en la zona sublevada. Es así como el General promulgó la Ley de 1 de octubre de 1936 por el que se crea un aparato administrativo y de gobierno al que se le dio el nombre de Junta Técnica de Estado, cuyas decisiones estarían necesariamente dirigidas, apoyadas y refrendadas por Franco. Este órgano quedaría extinguido por una Ley de 30 de enero de 1938, que organizaba la Administración central del Estado, constituyéndose el primer gobierno de la dictadura franquista.

Por otro lado, nos encontramos con otra parte del territorio nacional que continua bajo el dominio del Gobierno y la Administración del Estado legítimo de la República española que, a duras penas, es capaz de mantener el orden público y la seguridad en su territorio.

⁹⁰ LEÓN XIII, *Novae condenae legis*, 8 de febrero de 1893.

⁹¹ JULIÁ, S. *La Constitución de 1931*, Iustel, Madrid, 2009.

A partir de entonces, la situación es la siguiente: España dividida en dos, dominada por dos entes de poder, uno que tiene la legitimidad democrática del pueblo español y otro que se ha impuesto por las armas. Aun así, ambos poderes son efectivos o al menos lo intentan, de forma que las dos administraciones legislarán y reglamentarán afectando a la vida y relaciones de los ciudadanos españoles.

El catedrático de Derecho civil, Francisco Bonet Ramón, ya habría afirmado que “implantada la República en nuestra Patria, pronto menudearon sus alevosas agresiones contra los sentimientos católicos de los españoles”⁹².

Con el objetivo claro de los sublevados de destruir la legalidad republicana, iniciado el golpe militar, se encargó a la Comisión de Justicia, por Decreto de 1 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica de Estado, el examen de toda la legislación anterior al 18 de julio de aquel mismo año para que se propusiera la derogación inmediata de todas aquellas disposiciones que “se estimasen por su aplicación contrarias a los altos intereses nacionales” e incompatibles con el llamado Movimiento Nacional.

La Legislación de la nueva administración golpista durante el periodo transitorio

Ley de 12 de Marzo de 1938 derogatoria de la Ley de Matrimonio Civil

El 21 de marzo de 1931 se publicó la Ley de 12 de marzo de 1938⁹³. La exposición de motivos señalaba que la Ley de 28 de junio de 1932 de Matrimonio Civil suponía una “agresión alevosa de la República contra los sentimientos católicos de los españoles”. Como no podía ser de otra forma, el artículo 1 de la presente Ley declaraba la derogación de la Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932, junto con las disposiciones dictadas para su aplicación.

Además, declaraba la plenitud de efectos civiles de los matrimonios canónicos celebrados durante la vigencia de la Ley de Matrimonio Civil desde su celebración, con independencia de que hubieran sido precedidos o seguidos de matrimonio civil, y exigía que fueran inscritos en el Registro civil de oficio o a instancia de parte.

⁹² BONET RAMÓN, F., “El divorcio y la nulidad de matrimonio en la legislación transitoria del nuevo Estado”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 1941, 3, p. 210.

⁹³ Anexos: IV. Ley de 12 de marzo de 1938 derogatoria de la Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932. Publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de marzo de 1938.

Por otra parte, declaró nulos los matrimonios civiles celebrados durante la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932 en la que alguno de los contrayentes tuviera voto solemne de castidad, y no hubiera sido dispensado canónicamente. Se indica que estos matrimonios surtirían efectos civiles solamente para el cónyuge de buena fe y para los hijos.

Finalmente, la disposición transitoria señalará que hasta se dicten nuevas normas, recobraba vigencia la totalidad del Título IV del Libro I del Código civil junto con el resto de normas que lo complementaban, que estaban en vigor en el momento de publicación de la Ley de 28 de junio de 1932 de Matrimonio Civil.

Esta ley se complementó con la Orden de 22 de Marzo de 1938 relativa a la “declaración de acatolicidad”, muy similar o que reproducía la Orden de 28 de diciembre de 1900.

Se puede concluir que, la Administración franquista, durante este periodo transitorio, derogó definitivamente la Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932, recobrando vigencia el articulado del Código Civil tal y como se conocía con anterioridad a esta ley. De modo que se retorna a un sistema matrimonial que otorga primacía y efectos civiles al matrimonio celebrado en forma canónica, y en el que la celebración de matrimonio en forma exclusivamente civil, solo será una posibilidad para aquellos que declaren la no profesión de la religión católica.

Otra de las consecuencias que tuvo la Ley de 12 de marzo de 1938 fue consagrar nuevamente en el Código civil la desigualdad entre mujeres y hombres devolviéndole la vigencia al artículo 57⁹⁴, que establecía el deber de obediencia de la mujer con respecto del marido. Al anularse la Ley de Matrimonio Civil, que había eliminado el artículo 57 del Código Civil, dicho artículo recobraba su vigencia retomando el viejo sistema patriarcal que al menos la República, en el plano constitucional y jurídico, trató de dinamitar.

Por otro lado, y referido a la polémica cuestión del divorcio, la administración de la zona golpista dictó una Ley de 23 de septiembre de 1939 relativa al divorcio. En la exposición de motivos, se indica explícitamente que uno de los objetivos del “Nuevo

⁹⁴ Artículo 57 del Código Civil de 1889, que recobra vigencia con la Ley de 12 de marzo de 1938: “El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido”.

Estado español” era eliminar toda la legislación laica de la República que era “radicalmente opuesta al profundo sentido religioso de la sociedad española.”⁹⁵ Esta Ley constaba de un Artículo único y de importantes Disposiciones Transitorias. Con ella se derogaba la Ley de Divorcio de 2 de marzo de 1932. Lo trascendente de esta norma para el estado de la cuestión matrimonial, era el contenido de sus disposiciones transitorias, de especial utilidad para la resolución de aquellos conflictos jurídicos que se plantearon durante este periodo transitorio. Las situaciones problemáticas fueron las siguientes:

Los matrimonios civiles, contraídos durante la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932 de Matrimonio Civil, continuarían gozando de plena eficacia civil con independencia de la derogación de la ley al amparo de la cual se celebraron. No existe disposición alguna durante este periodo que se refiera a esta situación particular. Además existen diversas Sentencias del Tribunal Supremo que avalaron la validez de estos matrimonios.

Los matrimonios civiles celebrados al amparo de la Ley, citada anteriormente, en los que uno de los contrayentes fuera un ordenado in sacris o profeso ligado con votos solemnes de castidad y que, no hubieran sido dispensados canónicamente de sus votos, fueron declarados nulos por el Artículo tercero de la Ley de 12 de Marzo de 1938 y, sólo se le reconocerían efectos civiles respecto del cónyuge de buena fe y de los hijos.

Los matrimonios canónicos celebrados bajo la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932 de Matrimonio Civil, que no hubieran sido precedidos o seguidos de matrimonio civil, adquirieron eficacia jurídica desde el momento de su celebración en virtud del Artículo segundo de la Ley de 12 de Marzo de 1938. Este mismo artículo exigirá su inscripción en el Registro civil, siempre que no hubieran sido precedidos o seguidos de matrimonio civil, porque si así hubiera sido se entiende que tendría efectos civiles el matrimonio civil. La Orden de 31 de Diciembre de 1940⁹⁶ concretó el procedimiento, indicando que dichos matrimonios podrían transcribirse directamente en los Registros civiles presentando simplemente el certificado correspondiente.

Los matrimonios canónicos, celebrados durante la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932, que hubieran sido precedidos o seguidos de matrimonio civil, no tendrían

⁹⁵ Boletín Oficial del Estado de 5 de octubre de 1939.

⁹⁶ Anexos: V. Orden de 31 de diciembre de 1940. Boletín Oficial del Estado de 4 de enero de 1941.

efectos civiles puesto que, el primer matrimonio, al ser un hecho realizado al margen de las instituciones republicanas habría gozado durante ese periodo de una total indiferencia para el ordenamiento jurídico. Sólo el matrimonio civil habría desplegado efectos jurídicos.

Los matrimonios civiles, contraídos conforme a la Ley de 28 de junio de 1932, en los que uno o ambos contrayentes estuvieran divorciados, conforme a la Ley de 2 de marzo de 1932 y que se encontraran alguno de ellos ligados canónicamente, se entenderán disueltos a instancia de parte por declaración judicial conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de 23 de septiembre de 1939⁹⁷. La causa para fundamentar dicha pretensión podría ser únicamente la de “reconstruir su legítimo hogar, o simplemente, la de tranquilizar su conciencia de creyentes”.

Aquellas personas que, hubieran contraído matrimonio canónico y civil durante la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932 y que, al amparo de la Ley del divorcio de 1932, se hubieran divorciado estarían incursas en la prohibición de contraer matrimonio con otra persona, en tanto subsista su vínculo canónico, en virtud de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley de 23 de Septiembre de 1939.

La resolución del supuesto de matrimonios celebrados por *aquellas personas que, habiendo contraído matrimonio civil durante la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932 y que, una vez derogada ésta, por la Ley de 12 de marzo de 1938, contraen matrimonio en forma canónica con distinta persona*, es la siguiente: para la Iglesia católica, el primer matrimonio no tenía ninguna validez puesto que a sus ojos era inexistente. Por el contrario, conforme al Derecho canónico, el segundo matrimonio celebrado en forma canónica, era válido. A ser este último matrimonio válido, y el Estado franquista reconocer conforme a la Ley de 12 de marzo de 1938 la eficacia jurídica de los matrimonios celebrados en forma canónica, la Iglesia pretendió que se diera eficacia civil a esos matrimonios canónicos. Sin embargo, el Estado, aun habiendo derogado la Ley de Matrimonio Civil, no había privado de validez aquellos matrimonios celebrados en forma exclusivamente civil durante la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932.

⁹⁷ Boletín Oficial del Estado de 5 de octubre de 1938.

Un sector pretendió que se decretara la disolución de esos matrimonios celebrados en forma civil, algo que jurídicamente era imposible porque la Ley del Divorcio había sido derogada y el matrimonio volvía a ser una institución de carácter indisoluble.

Como consecuencia de este último supuesto; se generó un curioso problema de “bigamia”, que no afectó a gran cantidad de personas, pero que fue tratado por los juristas de la época, por la jerarquía eclesiástica, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Dirección General de Registros y Notariado.

Dentro de la Jerarquía católica, hubo diversidad de opiniones al respecto que poco interesan en este estudio jurídico; Algunos defendieron que se dictara una ley de divorcio únicamente para disolver aquellos matrimonios celebrados en forma civil, que no hubieran sido seguidos de matrimonio canónico, durante la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932. Otros abogaron por que los que habían contraído matrimonio civil, durante la vigencia de la Ley de 1932, celebraran posterior matrimonio en forma canónica por ser esta “la solución que mejor se ajusta a las diversas instrucciones de la Santa Sede. Es la solución que los canonistas enseñan a los curas de almas, para que éstos, pesando la razón de pecado y la de escándalo, la encarezcan por todos los medios a los interesados.”⁹⁸

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo fue clara al respecto; los matrimonios civiles, celebrados bajo la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932, gozaban de plenos efectos civiles con independencia de que se reconociera la validez de un segundo matrimonio, celebrado en forma canónica, con distinto contrayente. A ese segundo matrimonio, no se le podía reconocer efectos civiles aun siendo válido. Así quedaría establecido en algunas Sentencias del Tribunal Supremo como la Sentencia de 25 de enero de 1956, de 16 de diciembre de 1960, de 29 de mayo de 1962, de 29 de mayo de 1964 y de 16 de mayo de 1969.

En cuanto a la Dirección General de Registros y Notariado: En primer lugar, habrá que señalar la existencia del artículo 252 del Reglamento del Registro civil que prohibía la inscripción del matrimonio canónico o civil cuando alguno de los contrayentes estuviera ya casado legítimamente. Igualmente, se dictaron dos resoluciones relevantes

⁹⁸ DEL AMO, L., “Los matrimonios civiles durante la República. Problemas que plantean”, Editorial *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1954.

que prohibieron al Encargado del Registro civil asistir e inscribir el segundo matrimonio celebrado en forma canónica en el marco de la situación descrita.⁹⁹

Es importante recordar, por otro lado, la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 15 de julio de 1961, que señalaba que no se procederá a la inscripción del matrimonio celebrado en forma canónica, por una persona que hubiera contraído previamente matrimonio civil con otra distinta, siempre que no se hubiera declarado nulo conforme a la legislación civil. De este modo, quedaba resuelto el problema planteado.

IX. LA ESPAÑA NACIONAL CATÓLICA: EL SISTEMA MATRIMONIAL DEL PRIMER FRANQUISMO 1939-1959

Ya, durante la Guerra civil, se había discernido claramente el objetivo de los militares sublevados, que apoyados por los sectores más reaccionarios de la sociedad e inmersos en la paranoia fascista y nacionalsocialista que recorría Europa, pretendieron, como así consiguieron, la destrucción del Estado social y democrático de Derecho que había tratado de consagrar la II República Española. Y para ello, lo primero que debía hacerse era apresurarse en la *destrucción del orden republicano*¹⁰⁰. Todo comenzó con un Decreto de 1 de Noviembre de 1936, donde en su artículo primero “se declara sin ningún valor u efecto todas las disposiciones que, dictadas con posterioridad al 18 de julio último no hayan emanado de las autoridades militares dependiente de mi mando, de la Junta de Defensa Nacional de España o de los organismos constituidos por ley de 1 de octubre próximo pasado”. El artículo segundo indicaba que “se examinarán cuantas leyes, decretos, ordenes, reglamentos y circulares sean anteriores a dicha fecha y se estimen por su aplicación contrarias a los altos intereses nacionales, proponiéndose su derogación inmediata”. Así comenzó la destrucción de la obra republicana. Más tarde, por Orden de 26 de abril de 1939, se suspendieron todos los procedimientos civiles de la zona republicana por “la ilegitimidad de la jurisdicción ejercida por los pseudotribunales de las zonas que han padecido bajo la dominación roja.”

⁹⁹ Resoluciones de 23 de abril de 1949 y de 15 de octubre de 1960 de la Dirección General de Registros y Notariado.

¹⁰⁰ JIMÉNEZ VILLAREJO, C., “La destrucción del orden republicano”, *Hispania Nova Revista de Historia Contemporánea*, 7, 2007.

Como ya se ha dicho con anterioridad, La Ley de 12 de marzo de 1938 había devuelto la vigencia al artículo 42 del Código civil que consagraba un sistema matrimonial canónico con efectos civiles, para los que profesen la religión católica y civil para aquellos, se entendía, que declarasen no profesar la religión católica. La Orden de 22 de Marzo de 1938 hizo algunas consideraciones en lo que implicaba esa “declaración de acatolicidad” que, como ya se había señalado, era muy similar a la Orden de 28 de diciembre de 1900 con la que bastaba para contraer matrimonio civil, la simple declaración, ante el Juez Municipal, de no profesar la religión católica.

Sin embargo, una vez finalizada la Guerra Civil, constituido ese “Nuevo Estado” ilegítimo, en lo que respecta al sistema matrimonial se “radicalizó la protección del matrimonio canónico”¹⁰¹ con respecto al régimen matrimonial transitorio que había establecido la administración sublevada. La Orden de 10 de Marzo de 1941, referida a esa “declaración de acatolicidad”, en su artículo primero, dirá que no basta ya con una mera declaración de acatolicidad por parte de alguno de los contrayentes para celebrar matrimonio civil, sino que sería necesario que ambos contrayentes, ya no solo uno de ellos, probaran documentalmente su acatolicidad es decir su no pertenencia a la Iglesia católica. Si no fuera posible su prueba, podían presentar declaración jurada de no haber sido bautizados pero si ésta fuere falsa, el matrimonio civil celebrado no será válido y por tanto no tendrá ningún tipo de eficacia civil.

En conclusión, y en base a las interpretaciones de López Alarcón¹⁰², solo podrían contraer matrimonio en forma civil aquellos católicos que, habiendo sido bautizados, hubieran sido excomulgados por sentencia o decreto, siendo ésta la prueba de la acatolicidad. En el caso de los no bautizados, su acatolicidad se demostraba por un documento que acreditara el no bautismo.

Aun así, se dictó una Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 28 de Junio de 1951 en la que se indicaba que la prueba de acatolicidad no tendría por qué ser necesariamente la sentencia o decreto de excomunión sino que, también, podría justificar esa acatolicidad la “Notoriedad de pertenecer a familias de confesión acatólica” y ello quedaría probado mediante acta notarial de notoriedad.

¹⁰¹ RIVES GILABERT, J. M. y RIVES SEVA, A. P., “Evolución histórica del sistema matrimonial español”, *Noticias jurídicas.com*, 2001.

¹⁰² LÓPEZ ALARCÓN, M., “Demostración de acatolicidad en los matrimonios civiles”, *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, Núm. 230, 15 de mayo de 1953.

Finalmente, se podría admitir que, esa declaración jurada de acatolicidad, podría utilizarse de modo subsidiario “cuando la prueba documental que establecía no era posible” puesto que para un acatólico bautizado sería imposible demostrar, de este modo, su acatolicidad. En conclusión, los acatólicos bautizados solo podían contraer matrimonio en forma civil si habían sido excomulgados, por decreto o sentencia, o si existía acta notarial de acatolicidad; lo cual era prácticamente imposible.

Con esta nueva regulación, se puede afirmar que el matrimonio civil quedó necesariamente restringido para los que nunca habrían sido bautizados, que no tendrían problema en hacer esa declaración jurada. Hipótesis, por otro lado, que parecía bastante difícil, en este nuevo régimen nacional católico, para los ciudadanos españoles.

El Concordato con la Santa Sede de 27 de agosto de 1953

El Estado español firmó un acuerdo con el Estado Vaticano en el que se disponía, entre otras cosas, que el Estado reconocía plenos efectos civiles al matrimonio celebrado en forma canónica y su formalización se alcanzaba con la inscripción del acto de matrimonio en el Registro correspondiente.

Tras el Concordato, se promulgó el Decreto de 26 de octubre de 1956 con el que se modificaba el artículo 37 del Reglamento del Registro civil de 13 de diciembre de 1870, señalándose en su artículo primero que “De conformidad con el artículo 42 del Código Civil, el matrimonio civil era autorizado en el solo caso de que ambos contrayentes prueben que no profesan la Religión católica”. Dicha prueba sería fiscalizada por la Autoridad eclesiástica necesariamente y se requerirá para celebración del matrimonio en forma civil que ambos contrayentes presenten dicha prueba.

Aun no se había hecho referencia al caso particular de los apóstatas; aun siendo esto prácticamente inverosímil en la España franquista, la Dirección General de Registros y Notariado dictó una Circular el 2 de abril de 1957 en la que permitía la celebración de matrimonio civil para los apóstatas siempre que presentaran “prueba suficiente y adecuada de su actitud ostensiblemente desvinculadora y apóstata de la dogmática fundamental del catolicismo, lo suficientemente expresiva para llevar al ánimo del Juez, la convicción de una autentica apostasía”. Además, señalaba que se debía poner en duda aquellas “apostasías que tienen lugar al tiempo que se pretende contraer matrimonio

civil, pues bien pudieran ser motivadas más que por un cambio de fe, por el deseo de eludir la disciplina canónica del matrimonio.”

La Ley de 8 de junio de 1957 del Registro civil no prescribía nada nuevo al respecto. Señalaba, igualmente, que solo se autorizaría la celebración del matrimonio en forma civil a aquellos que probasen la no profesión de la religión católica.

El 24 de abril de 1958 se dicta una ley que modifica algunos preceptos del Código civil, pero mantiene la vigencia del artículo 42 del Código civil reconociendo efectos civiles a las dos clases de matrimonio, el canónico y el civil, indicando que el matrimonio deberá celebrarse en forma canónica siempre que uno de los contrayentes profese la religión católica, pudiéndose celebrar el matrimonio en forma civil cuando se acredite que ninguno de los contrayentes profesa la religión católica. Conforme a la interpretación del artículo realizada por López Alarcón¹⁰³, se entendería que no profesan la religión católica: “los infieles; los bautizados en la herejía o en el Cisma; los católicos por bautismo o por conversión que después hayan apostatado formal y materialmente; los excomulgados vitandos.”¹⁰⁴

Teniendo en cuenta esa nueva legislación, lo que era una evidencia es que, cuando al menos uno de los contrayentes fuere católico, contraer matrimonio en forma canónica constituía una obligación.

X. CONCLUSIONES

Como ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de este estudio, el objetivo de los grandes líderes de los partidos republicanos, conservadores, liberales y socialistas, que se unieron para traer la República a España fue, sin lugar a dudas, no solo poner fin al sistema caciquil y oligárquico sostenido por la Monarquía sino transformar radicalmente los valores de la sociedad española.

La transmutación de los valores morales y sociales de un pueblo dominado por el catolicismo más reaccionario y por una Iglesia que representaba un poder fáctico de especial envergadura, a la que se le hacía responsable del atraso de la sociedad y de haber sido cómplice de la violencia y de los regímenes políticos que tan graves

¹⁰³ LÓPEZ ALARCON, L. *El matrimonio civil y su inscripción*, Pretor, 1959.

¹⁰⁴ RIVES GILABERT, J. M. y RIVES SEVA, A. P., “Evolución histórica del sistema matrimonial español”, *Noticias Jurídicas.com*, 2001.

perjuicios habían provocado, inexorablemente implicaba la total separación de la Iglesia y del Estado.

Por otro lado, el afán de construir una sociedad libre y plural, abierta y democrática, consecuencia del influjo de los postulados ilustrados y liberales, que inspiraron la Revolución francesa, pero también de los marxistas y socialistas, suponía la incorporación en la Constitución de todo un articulado, al que hemos denominado bloque de laicidad, que configuraría la Constitución de la República española como una constitución verdaderamente laica. Se reconocía así la separación de la Iglesia-Estado, la neutralidad religiosa del Estado, la libertad religiosa, de conciencia y de culto, y se secularizaba la institución familiar y matrimonial con el ya tan citado artículo 43.

La secularización, creaba un nuevo concepto de familia basado en la consanguinidad, en la que el matrimonio podía disolverse por mutuo disenso, donde los cónyuges tenían los mismos derechos y obligaciones y en la que no existía la diferenciación entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales.

La Constitución laica de 1931 inspiró todos los trabajos legislativos, que posteriormente, serían promulgados por las Cortes de la II República española. Así se puso de manifiesto con la aprobación de la Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932, por la que se consagraba un nuevo régimen matrimonial que solo reconocía eficacia jurídica al matrimonio celebrado en forma civil, desde su entrada en vigor. Por otro lado, consagraba la expulsión de la Iglesia Católica de las instituciones públicas puesto que, perdía ésta toda prerrogativa, que los regímenes anteriores le hubieran otorgado en la materia familiar o matrimonial. Cualquier cuestión relativa a la familia o matrimonio sería competencia exclusiva de las autoridades y tribunales civiles.

La sublevación militar de 18 de julio de 1936, con la consiguiente Guerra civil, junto con la constitución de un nuevo Estado antidemocrático, represivo y confesional católico, dinamitó toda la legislación republicana ligada a las libertades, al progreso, a la igualdad y a la justicia social. Recobrando nuevamente su poder la Iglesia Católica, quien sería la responsable de la dominación espiritual de la sociedad española durante el periodo de la dictadura, inspiró nuevamente la legislación en materia familiar y matrimonial.

El nuevo Régimen derogaba la Ley de Matrimonio Civil de la II República e imponía un sistema matrimonial principalmente canónico, para los que profesaren la religión católica y civil, de modo subsidiario, siempre que ambos contrayentes probaran documentalmente su no pertenencia a la Iglesia católica. Así, los bautizados solo podrían acceder al matrimonio civil si hubieran sido excomulgados o fuera notoria su pertenencia a familias de confesión acatólica.

Con independencia de los afectos que se le profesen a la II República Española, así como de los errores que pudo cometer ésta en su breve y turbulento periodo de vida, se ha querido poner de manifiesto en este análisis histórico-jurídico la importancia y valor de la obra laicizadora de los republicanos, que con gran inteligencia atisbaron, como la historia ponía de manifiesto, que un Estado y un pueblo sometido a la Iglesia y a la moral católica, solo puede ser un pueblo esclavo y oprimido.

BIBLIOGRAFÍA

ALCALÁ-ZAMORA, N., “La Constitución dañosa y deshecha, pero...definitiva”, *Obra completa. La Guerra Civil ante el Derecho Internacional; Régimen político de convivencia en España. Lo que no debe ser y lo que es*, Parlamento de Andalucía, Sevilla, 2000.

ALCALÁ-ZAMORA, N., *Los defectos de la Constitución de 1931*, Imprenta de R. Espinosa, Madrid, 1936.

BARRERO ORTEGA, A. “La libertad religiosa en la historia constitucional española”, *La libertad religiosa en España*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006.

BLANCO NÁJERA, F., “La función educativa de la familia, a la luz del derecho natural y de la legislación canónico-civil”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 1932.

BONET RAMÓN, F., “El divorcio y la nulidad de matrimonio en la legislación transitoria del nuevo Estado”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 3, 1941.

CASANOVA, J., “Prólogo”, *Historia de España: República y Guerra civil Vol. 8*, Crítica-Marcial Pons, Barcelona, 2007.

CASTÁN, J., “Hacia un nuevo derecho civil”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 1-2, 1933.

DE BUEN, D., “La legislación civil del nuevo régimen”, *Introducción al estudio del Derecho civil*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932.

DE CASTRO, F., “El Derecho Civil y la Constitución”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 257, 1935.

DEL AMO, L., “Los matrimonios civiles durante la República. Problemas que plantean”, *Editorial Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1954.

DELGADO DE MIGUEL, J. F., “El matrimonio, realidad social e institución jurídica”, *Instituciones de Derecho Privado: Tomo IV, Familia*, Civitas, Madrid, 2001.

DELGADO IRIBARREN, F., “El Derecho de Familia en la Constitución de la República Española de 1931”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 222, 1932.

DIEZ PASTOR, J. L., “La familia y los hijos habidos fuera del matrimonio según la Constitución”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 238-239, 1933.

- ESCUADERO ALDAY, R., *Modelos de democracia en España 1931-1978*, Península, Barcelona, 2013.
- GIL ANDRÉS, C., *Españoles en guerra: la Guerra Civil en 39 episodios*, Ariel, Barcelona, 2014.
- GONZÁLEZ PALOMINO, J., “Valor civil de las normas constitucionales”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 243, 1933.
- JIMÉNEZ VILLAREJO, C., “La destrucción del orden republicano”, *Hispania Nova Revista de Historia Contemporánea*, 7, 2007.
- JOVELLANOS, G, M de., *Memoria sobre educación pública*, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1858, p. 232.
- JULIÁ, S, *La Constitución de 1931*, Iustel, Madrid, 2009.
- LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., “Libertad de conciencia y modelos de Estado en la Historia de occidente”, *Derecho de la libertad de conciencia I: Conciencia, tolerancia y laicidad*, Civitas, Navarra, 2011.
- LÓPEZ ALARCÓN, L., *El matrimonio civil y su inscripción*, Pretor, 1959.
- LÓPEZ ALARCÓN, M., “Demostración de acatolicidad en los matrimonios civiles”, *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, Núm. 230, Madrid, 1953.
- MORALES MOYA, A., “La ideología de la Ilustración española”, *Revista de Estudios Políticos*, 59, 1988.
- NAVARRO DE LUJÁN, V.L., “La cuestión religiosa en el debate constituyente de 1931”, *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, 67-68, 2009.
- PÉREZ SERRANO, N., “Carácter de la nueva Constitución española”, *Revista de Derecho Público*, Madrid, 1, 1932.
- PÉREZ SERRANO, N., *Tratado de Derecho Político*, Civitas, Madrid, 1976.
- POLO, A., “Las transformaciones del Derecho Privado”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 254, 1934.
- RIVES GILABERT, J. M y RIVES SEVA, A. P., “Evolución histórica del sistema matrimonial español”, *Noticias jurídicas.com*, 2001.

RODRÍGUEZ, J. A y AMÉRIGO, F., “Algunos elementos de la formación del Estado laico francés como reacción defensiva contra la Iglesia Católica”, *ull.es*, 2008.

ROUSSEAU, J.J., “La religión civil”, *El contrato social*, Circo, Italia, 2011.

SÁNCHEZ ROMÁN, F., *Estudios de Derecho Civil*, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1912.

VÁZQUEZ ALONSO, V, J., “Los perfiles jurídicos del modelo de laicidad francés”, *Laicidad y Constitución*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012.

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1931.

Diario de Sesiones de las Cortes de la República Española de 1932.

Boletín Oficial del Estado.

Gaceta de Madrid.

ANEXOS

I. Preceptos que consagran la configuración laica de la Constitución de la II República Española de 1931

Artículo 3.

El Estado español no tiene religión oficial.

Artículo 25.

No podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.

El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.

Artículo 26.

Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado,
2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de justicia.

3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4. Prohibición de ejercer la industria el comercio o la enseñanza.

5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.

Artículo 27.

La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros.

Artículo 43.

La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.

Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.

Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él.

Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.

No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna.

El Estado prestara asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la "Declaración de Ginebra" o tabla de los derechos del niño.

II. Orden del Ministerio de Justicia de 16 de Febrero de 1932¹⁰⁵

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN

Ilmo. Sr.: Considerando que establecidos en la Constitución vigente los principios de confesionalidad del Estado y de plena libertad de conciencia para profesar y practicar cualquier religión, es de toda evidencia que hasta que en la ley de Matrimonio civil, que actualmente redacta, para someterla a la aprobación del Gobierno y después a la de las Cortes, la Comisión Jurídica Asesora, se regulen definitivamente los requisitos, forma y solemnidades del matrimonio, no debe exigirse a las que se propongan contraerlo civilmente declaración previa alguna acerca de sus creencias, quedando el precepto del artículo 42 del Código civil, reducido a sus verdaderos límites de simple advertencia que solamente puede atender la conciencia de los interesados.

Considerando que por consecuencia de lo antes expuesto; y hasta que se apruebe y publique la ley sobre Matrimonio civil, procede declarar derogada la Real Orden de 28 de diciembre de 1900 y disponer que los Jueces municipales y los Agentes diplomáticos y Consulares que hagan sus veces en el extranjero; procedan a la celebración de los matrimonios civiles de los que lo soliciten, sin exigir la declaración previa prevenida en la citada Real Orden.

Considerando que hasta tanto que aquella Ley se publique es deber del Estado facilitar la celebración del matrimonio civil, limando y disminuyendo las dificultades que el actual sistema presenta, y a este fin, deben existir en todos los Juzgados municipales y Consulados impresos de declaración para solicitar la celebración del matrimonio civil, que contengan todos los requisitos exigidos por el artículo 86 del Código civil; y pueden sencillamente llenarse por los interesados,

¹⁰⁵ Publicada en la Gaceta de Madrid el 17 de febrero de 1932.

sin que por facilitar esos modelos o instruir a los solicitantes pretendan exigir los encargados del Registro derechos ni emolumentos de ninguna clase, pues será obligación suya el hacerlo de modo absolutamente gratuito.

Este Ministerio ha tenido bien disponer:

1. ° Se declara derogada la Real Orden de 28 de Diciembre de 1900, y en consecuencia, no se exigirá a los que soliciten la celebración del matrimonio civil, declaración alguna respecto de sus creencias religiosas ni de la religión que profesen.

2. ° En todos los Juzgados municipales de la República y Consulados de España en el extranjero existirán impresos de declaración para solicitar la celebración del matrimonio civil, formados con arreglo al modelo que adjunto se publica, con el fin de que puedan ser llenados por los solicitantes. Estos impresos serán facilitados gratuitamente por los Jueces municipales y por los Cónsules o Vicecónsules, que deberán dar a los interesados las instrucciones para llenarlos debidamente, y todas las demás que sean precisas para la celebración del matrimonio, sin que por esto puedan percibir derechos ni retribución alguna.

Madrid, 10 de Febrero de 1932.

ÁLVARO DE ALBORNOZ

III. Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932¹⁰⁶

MINISTERIO DE JUSTICIA,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

Que las Cortes han decretado y sancionado la siguiente:

LEY

Artículo 1.º A partir de la vigencia de la presente Ley, solo se reconoce una forma de matrimonio, el civil, que deberá contraerse con arreglo a dispuesto en las secciones primera y segunda del capítulo 3.º de título 4.º del Libro 1.º del Código civil, con las modificaciones siguientes:

¹⁰⁶ Publicada en la Gaceta de Madrid el 3 de Julio de 1932

1. ^a Los mayores de edad no están obligados a obtener ni acreditar el consejo a que se refiere el número 1.º del artículo 45 y el artículo 47 del Código civil.

2. ^a La licencia que deben obtener los menores de edad se acreditará mediante documento autorizado por Notario, por el funcionario ante quien deba celebrarse el matrimonio o por el juez municipal del domicilio del que haya de otorgarla, si no fuese el elegido para la celebración del acto.

3. ^a Queda suprimido el impedimento señalado en el número 4.º del artículo 83 del Código civil.

4. ^a No podrán contraer matrimonio entre si los colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, sustituyéndose con esta disposición lo establecido sobre impedimentos en los números 2.º, 3.º y 4.º del artículo 84 del mismo Código.

5. ^a Al Juez de primera instancia del partido a que pertenezca el Juzgado municipal designado para la celebración del matrimonio corresponderá dispensar, a instancia de parte y mediando justa causa, los impedimentos nacidos de la consanguinidad en tercer grado entre colaterales, de la afinidad en línea colateral, el comprendido en el número 2.º del artículo 45 del Código civil y los referentes a los descendientes del adoptante con el adoptado. El mismo Juez de primera instancia podrá dispensar la publicación de edictos por las causas que se indican en el artículo 92 del referido Código.

6. ^a El matrimonio se celebrará en la forma prevenida en el artículo 100 del Código civil, omitiendo la lectura del artículo 57 de dicho Cuerpo legal.

Artículo 2.º No se exigirán derechos por el expediente matrimonial ni por la celebración del acto.

Artículo 3.º Las certificaciones del Registro civil y demás documentos que sean precisos para la celebración del matrimonio se expedirán en papel timbrado de la última clase y sin exacción de derechos, expresándose al pie de los mismos que solo serán válidos para este fin.

Artículo 4.º La jurisdicción civil es la única competente para resolver todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación de esta Ley, incluso las que se relacionan con la validez o nulidad de los matrimonios celebrados con arreglo a la misma conforme a lo dispuesto en los artículos 101 a 103 del Código civil. Las cuestiones relacionadas con la validez o nulidad de los matrimonios canónicos celebrados antes de la vigencia de esta Ley, serán resueltas por los Tribunales civiles, que aplicarán las Leyes canónicas con arreglo a las que fueron contraídos. Las sentencias y demás resoluciones de los Tribunales eclesiásticos sobre lo que constituye el objeto de esta Ley, no producirán efectos civiles.

Artículo 5.º La presente Ley comenzará a regir a los treinta días, a contar desde el siguiente de su publicación en la Gaceta de Madrid.

Artículo 6.º Quedan derogadas todas las disposiciones legales, Reglamentos, Decretos y Órdenes que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Por tanto:

Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, veintiocho de Junio de mil novecientos treinta y dos.

NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES

El Ministro de Justicia,

Álvaro de Albornoz y Liminiana.

IV. Ley de 12 de marzo de 1938¹⁰⁷ derogatoria de la Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932

Gobierno de la Nación

Ministerio de Justicia

Ley

EXPOSICIÓN

La Ley de veintiocho de junio de mil novecientos treinta y dos constituye una de las agresiones más alevosas de la República contra los sentimientos católicos de los españoles y al instituir el matrimonio civil como único posible legalmente en España, desconociendo el aspecto religioso intrínseco de la institución, creó una ficción en pugna violenta con la conciencia nacional.

Se impone en consecuencia, como imperativo de justicia y desagravio de la conciencia católica de los españoles, la apremiable derogación de la sectaria Ley de veintiocho de junio de mil novecientos treinta y dos, volviéndose a la legalidad del Código civil, cuyos preceptos en la

¹⁰⁷ Publicada en el Boletín Oficial del Estado de 21 de Marzo de 1938.

materia regularán el matrimonio mientras el Estado Español no determine la adopción de normas que lo modifiquen.

En su virtud, previa deliberación del Gobierno y a propuesta del Ministro de Justicia,

DISPONGO

Artículo primero.- Quedan derogadas la Ley de Matrimonio Civil de veintiocho de junio de mil novecientos treinta y dos y las disposiciones dictadas para su aplicación.

Artículo segundo.- Los matrimonios canónicos celebrados durante la vigencia de la Ley de veintiocho de junio de mil novecientos treinta y dos, producirán todos los efectos civiles desde su celebración, sin perjuicio de los derechos adquiridos a título oneroso por terceras personas. A los fines de los artículos 325 y 327 del Código civil, las partidas sacramentales de los expresados matrimonios canónicos que no hubieran sido precedidos o seguidos de matrimonio civil, deberán ser transcritas en el Registro de este nombre, de oficio o a instancia de parte, en el plazo de sesenta días, a contar desde la publicación de esta ley.

Artículo tercero.- Se declaran nulos los matrimonios civiles contraídos por personas comprendidas en el numero cuarto del artículo ochenta y tres del Código civil (ordenados in sacris o profesos ligados con votos solemnes de castidad), no dispensados canónicamente y únicamente surtirán efectos civiles respecto del cónyuge de buena fe y de los hijos.

Artículo cuarto.- Por el Ministerio de Justicia se dictarán las órdenes necesarias para la ejecución de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo quinto.- La presente Ley empezará a regir a partir de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Disposición transitoria.- Hasta tanto se dicten nuevas normas se declararán vigentes el Título cuarto del Libro primero del Código civil y todas las demás normas complementarias del mismo, que estaban en vigor en la fecha de publicación de la Ley que se deroga.

Dada en Burgos a doce de marzo de mil novecientos treinta y ocho.- II Año Triunfal.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,

Tomás Domínguez Arévalo.

V. Orden de 31 de diciembre de 1940¹⁰⁸

Ilmo. Sr.: Con las sucesivas prórrogas concedidas al plazo señalado a la Ley de 12 de marzo de 1938, al objeto de transcribir en los Registros civiles los certificados de matrimonios canónicos contraídos durante la vigencia de la Ley de Matrimonio Civil, se ha conseguido que se inscriban la mayor parte de estos matrimonios, pero puede haber ocurrido, por distintas causas, que no haya sido posible realizar la transcripción y no parece justo someter, a los cónyuges que tuvieron el valor de no aceptar la legislación laica sobre el matrimonio civil, a la instrucción de un expediente de inscripción fuera de plazo del matrimonio único reconocido legal por la Iglesia, con las consiguientes molestias y dilaciones y, sobre todo, con la limitación de no producir efectos civiles sino desde su inscripción.

En virtud de las razones anteriores, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Los matrimonios canónicos contraídos durante la vigencia de la Ley de 28 de junio de 1932, que no hubieran sido acompañados ni seguidos de matrimonio civil, pueden transcribirse en los Registros civiles hasta nueva disposición, con la simple presentación en los mismos del certificado correspondiente expedido con las formalidades legales.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 31 de diciembre de 1940.

BILBAO EGUÍA

¹⁰⁸ Publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de enero de 1941.